The background of the entire page is a stylized map of the TUMACO region. It features a dark blue base color with lighter blue and white outlines representing geographical features, roads, and urban grids. The map is partially obscured by the text in the upper half.

TUMACO: **territorio de** **encrucijadas** **múltiples**

Criminalidad, conflictividad y convivencia

TUMACO: territorio de encrucijadas múltiples

Criminalidad, conflictividad y convivencia

JUNIO 2024



JUNIO 2024

Participación:

Grupo para el Desarrollo Social - SDG

Julián Correa, Investigador SDG

Ana María Restrepo, Directora SDG

Ángela Ceron, Consultora SDG

Con el apoyo de:

Juan Pablo Arciniegas, Consultor SDG

Enilda Jimenez, Consultora SDG

Judith Palacios, Consultora SDG

Julián Martin, Oficial Adm SDG

Esperanza Pedroza, Consultora SDG

Universidad EAFIT

Gustavo Duncan

Universidad OXFORD

Zora Houser

Diseño y diagramación

Luisa Santa

Correccion de estilo

Juan Fernando Saldarriaga

The authors gratefully acknowledges the support from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation program (grant agreement No. 101020598-CRIMGOV)"
Los autores expresan su más sincero agradecimiento al Consejo Europeo de Investigación (ERC) por el apoyo recibido a través del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, bajo el número de acuerdo de subvención No. 101020598-CRIMGOV.

Contenido

7	INTRODUCCIÓN
10	CAPÍTULO 1. METODOLOGÍA
14	CAPÍTULO 2. ACTORES ARMADOS ILEGALES EN TUMACO
34	CAPÍTULO 3. TUMACO COMO PARADIGMA EN ENCLAVE PRODUCTIVO
52	CAPÍTULO 4. RETOS PARA LAS AUTORIDADES PÚBLICAS EN TUMACO
67	CONCLUSIONES
72	REFERENCIAS

El Grupo de Desarrollo Social (SDG) es una organización no gubernamental establecida en Colombia desde el 2013. La organización obtiene su financiamiento a través de cooperación internacional, lo que ha permitido mantener la independencia en la implementación de sus proyectos.

Los objetivos principales de SDG incluyen la promoción de la paz, la resolución de conflictos, la justicia transicional, la protección de los derechos humanos, el avance de la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y la facilitación de diálogos constructivos entre la sociedad civil y las fuerzas de seguridad del Estado. Uno de los proyectos emblemáticos del Grupo de Desarrollo Social (SDG) es el “Espacio de Diálogo entre las Fuerzas Militares/ Policía Nacional y la Sociedad Civil”. Este proyecto, lanzado en el año 2000 en respuesta a un proceso de paz frustrado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Gracias a la confianza establecida entre los integrantes de SDG y los altos mandos militares y policiales, se ha logrado una apertura significativa para llevar a cabo diálogos en los territorios. La confianza ofrece una oportunidad crucial para promover la solución política del conflicto, la seguridad ciudadana, el desarrollo y la investigación social de las comunidades.

Los conversatorios entre fuerza pública y sociedad civil han permitido recoger información de primera mano, ofreciendo una perspectiva integral sobre la complejidad de los problemas sociales y de seguridad que enfrentan comunidades periféricas en riesgo. Precisamente, el trabajo de investigación del siguiente documento es producto de los conversatorios realizados en la región de Tumaco, los cuales han involucrado a las comunidades locales y a las fuerzas de seguridad pública. Tumaco es una de las regiones más afectadas por el narcotráfico, sus comunidades se encuentran sumidas en una situación de constante vulnerabilidad y riesgo. Las políticas antidrogas implementadas por los últimos gobiernos, las dinámicas de los grupos armados y la caída de los precios de la hoja de coca, entre otros factores, han tenido un impacto significativo en la economía y la seguridad de la población.

A través de esta investigación, financiada por la Embajada de Noruega y en asocio con la Universidad EAFIT y el programa de investigación CRIMGOV de la Universidad de OXFORD, se documentan las dificultades que enfrenta Tumaco, sus comunidades y sus líderes y lideresas, y se exploran propuestas y estrategias que puedan ser implementadas para abordar de manera efectiva los problemas derivados del narcotráfico y de violaciones de derechos humanos de sus comunidades.

TUMACO: **territorio de** **encrucijadas** **múltiples**

Criminalidad, conflictividad y convivencia*

* Los autores reconocen con gratitud el apoyo del Consejo Europeo de Investigación, en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020, de la Unión Europea (Convenio de financiación N.º 101020598-CRIMGov).

Introducción

Tumaco afronta una de las situaciones de mayor complejidad de seguridad pública en la región del Pacífico colombiano y en el país. Múltiples determinantes estructurales de tipo geográfico, histórico-político y socioeconómico han confluído recientemente con situaciones propias del conflicto armado interno, la criminalidad organizada y el narcotráfico, para llevar, en la última década, a un estado crítico la situación humanitaria en el territorio. En efecto, el pasado colonial esclavista y el posterior abandono institucional en el periodo republicano privaron a la población de la región, predominantemente afrocolombiana, del desarrollo socioeconómico que experimentaron otras zonas del país, como la región andina, epicentro del poder político nacional. Hubo un estancamiento endémico de las condiciones de vida de los habitantes de Tumaco, incluso después del asentamiento, en el territorio de economías conectadas con grandes mercados, como la extracción de oro, la explotación de madera o la plantación de monocultivos de palma de aceite.

Ya entre la década de los ochenta del siglo pasado y el año 2000 se produjo la incursión, en la región, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). De este último grupo, el Bloque Sur Occidental introdujo la implantación de cultivos de hoja de coca en la década de los noventa. Este hecho marcó un punto de inflexión para Tumaco. Desde entonces, se forjó un cambio de paradigma que llevó al predominio paulatino del tráfico de cocaína como uno de los principales motores de la economía de la zona. Como consecuencia, pese a la desmovilización de la mayor parte de los combatientes de las FARC-EP en 2016, existe hoy en Tumaco una variedad de grupos armados ilegales que se disputan a sangre y fuego el control del narcotráfico y que pretenden suplantar al Estado en su función de provisión de orden, seguridad y justicia, a la vez que se acrecienta una intrincada dependencia de la población en el cultivo de hoja de coca como fuente básica de sustento económico.

Las actividades ilícitas en Tumaco no se circunscriben exclusivamente al narcotráfico, ya que se extienden a otros fenómenos delictivos, como la minería ilegal, el contrabando y la extorsión. Además, es importante destacar que las dinámicas de criminalidad organizada y las correlativas problemáticas de seguridad pública —aun cuando estrechamente relacionadas entre sí— divergen sustancialmente entre la zona urbana y la zona rural de Tumaco.

En este sentido, este informe analiza la situación de Tumaco en cuanto:

1. *Los efectos del narcotráfico en la región:* Tumaco y el Pacífico nariño no solo son una de las áreas con mayor cantidad de hoja de coca sembradas en el país en los últimos años, sino también un territorio donde existen numerosos laboratorios para procesar pasta base de coca y producir cocaína. Así mismo, dada su doble condición de zona de frontera con Ecuador y de territorio sobre la costa

pacífica, Tumaco se perfila como enclave de distribución interna y de exportación de cocaína a mercados ilícitos internacionales localizados en Norteamérica y Europa, a través de Centroamérica y Ecuador.

2. *La dinámica de la confrontación entre organizaciones armadas irregulares:* la concurrencia de una variada gama de actores armados enfrentados y en ocasiones aliados entre sí, desde las disidencias de las FARC-EP hasta organizaciones criminales en áreas urbanas, articuladas con carteles mejicanos que los utilizan para asegurar la provisión de cocaína, ha provocado un crecimiento exponencial de la violencia en Tumaco y en la región, que se materializa en el control de la población en el territorio y en graves violaciones a los derechos humanos: homicidios selectivos, desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades afrocolombianas e indígenas que en su mayoría habitan territorios de propiedad colectiva.

El documento consta de cinco partes. En la primera, se expone la metodología. A continuación, se identifican y se categorizan los actores armados que operan en la región, de acuerdo con su evolución militar y su relación con la población. Luego, se analiza el fenómeno del narcotráfico en la región, lo que incluye los cultivos y la producción de base, los laboratorios de cocaína, su exportación a los mercados mundiales y el microtráfico en las cabeceras urbanas. Posteriormente, se tratan los problemas de seguridad producidos por los actores armados irregulares y el narcotráfico y que se constituyen en un desafío para la implementación de los derechos humanos en la región y para la acción y el reconocimiento de las autoridades y el Estado. Por último, se plantean las conclusiones del informe.

1





C A P Í T U L O U N O

METODO- LOGÍA



Se emplearon tres técnicas de indagación complementarias entre sí, que posibilitaron una adecuada aproximación a los temas de investigación en Tumaco:

- Rastreo, sistematización y revisión de fuentes bibliográficas primarias y secundarias, que abarcan literatura académica especializada (artículos, capítulos y libros), informes de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias que hacen presencia en el territorio, e investigaciones periódicas publicadas como resultado de trabajos de campo llevados a cabo en terreno.
- Formulación, realización y análisis de entrevistas semiestructuradas. Para ello, las entrevistas y sus correspondientes preguntas se construyeron de forma diferencial, de acuerdo con las siguientes categorías de públicos: líderes sociales/comunitarios, líderes de sustitución de cultivos ilícitos, uniformados adscritos a la Fuerza Pública, servidores públicos de la administración local, representantes de organizaciones internacionales, religiosos de la Iglesia católica y otras confesiones, e integrantes de grupos armados ilegales.
- Visita de campo al terreno, con un doble propósito: 1) aproximarse de primera mano a las características geográficas, histórico-políticas y socioeconómicas que hacen de Tumaco una región particularmente propensa a padecer tanto dificultades estructurales de pobreza, marginalidad y exclusión, como problemáticas coyunturales de seguridad pública asociadas al conflicto armado interno, la criminalidad organizada y el narcotráfico; y 2) interactuar y construir lazos de confianza mínimos con los distintos tipos de público a quienes estuvieron dirigidas las entrevistas semiestructuradas realizadas.



C A P Í T U L O D O S

ACTORES ARMADOS ILEGALES EN TUMACO



Evolución de los actores armados irregulares

A diferencia de otras regiones del país, la aparición del conflicto en Tumaco se remonta a un periodo comparativamente reciente: mediados de la década de los ochenta. A comienzos de esa década, el narcotraficante Helmer 'Pacho' Herrera, perteneciente al cartel de Cali, incursionó en la zona comprando tierras del litoral, con el fin de exportar cocaína. Lo propio hicieron otros traficantes menores, que adquirieron terrenos donde existían plantaciones de palma de aceite, para hacerse con el control de rutas marítimas (Escobedo y Palacios, 2009, p. 43).

El ingreso de narcotraficantes al territorio durante esos años tuvo efectos limitados sobre la sociedad, en comparación con lo que ocurriría una década después. Si bien llegaron nuevos flujos de dinero a la región, estos narcotraficantes no organizaron ejércitos privados con extensa capacidad de control territorial. Los grupos armados estaban limitados a la protección de las rutas y los laboratorios de los narcotraficantes. Tampoco organizaron zonas de cultivos que incluyeran a un amplio sector de los habitantes rurales en los circuitos económicos de la hoja de coca.

Por la misma época, mediados y finales de los años ochenta, agrupaciones insurgentes incursionaron en Tumaco: el ELN, que formó el Frente Comuneros del Sur y las columnas móviles Héroes, Mártires de Barbacoas y Guerreros de Sindagua (Millán, 2011, p. 114) —cuya presencia en el municipio resulta marginal actualmente—, y el Bloque Sur Occidental de las FARC-EP, cuyas disidencias hacen fuerte presencia en Tumaco en la actualidad.

Para la segunda mitad de la década de los noventa, la columna móvil Daniel Aldana, de las FARC-EP, se erigió como la estructura ilegal pionera

en introducir plantaciones de hoja de coca en Tumaco, como consecuencia de que en los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo, que hasta entonces habían sido las principales zonas cocaleras del país, se concentró la acción de la Fuerza Pública y los operativos de fumigación del Plan Colombia (Rocha, 2014, pp. 14-16). La escasa presencia de la fuerza pública y la extensión del territorio fueron factores que, en un principio, contribuyeron a la expansión de las FARC-EP y el ELN en la región.

Las guerrillas, en particular las FARC-EP, supusieron el ejercicio de control de la población por un ejército irregular. Por su tamaño, las guerrillas estaban en condiciones de vigilar la población de las zonas rurales de Tumaco y el Pacífico nariñense. Eran ejércitos concebidos para hacer una revolución nacional. En consecuencia, el control local estaba enfocado en la acumulación de recursos de guerra para escalar la confrontación militar contra el Estado.

La población local se convirtió en objetivo de guerra. Su colaboración era esencial para las guerrillas, desde el suministro de información y el abastecimiento de víveres hasta la apropiación de los excedentes de la base de coca y el reclutamiento de jóvenes entre los habitantes locales. De esa manera, la llegada de la guerrilla y, en general, del conflicto armado al territorio, convirtió a los habitantes de la región en víctimas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos por los distintos actores armados —guerrillas, paramilitares y el propio Estado.

En la primera década de los dos mil, la proliferación de cultivos ilícitos en el Pacífico nariñense significó una bonanza cocalera para Tumaco. Colonos provenientes de otras regiones y de países limítrofes se asentaron en la zona como *raspachines* (recolectores de la hoja de coca en tiempos de cosecha), aumentó la distribución de precursores químicos, se crearon laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y los corregimientos de Llorente, La Guayacana y La Espriella se convirtieron en centros de acopio de cocaína. Para ese entonces, aún la columna móvil

Daniel Aldana de las FARC-EP ejercía un control casi total sobre estas poblaciones (Rocha, 2014, p. 15).

En esa misma década, en desarrollo de la ofensiva contrainsurgente iniciada por los grupos paramilitares, el Bloque Libertadores del Sur (BLS), del Bloque Central Bolívar, de las AUC, incursionó en la región. Esta estructura se empeñó en arrebatárles a las FARC-EP el control de las áreas de cultivo, procesamiento y acopio de cocaína, así como los corredores de narcotráfico, lo que implicó una escalada del conflicto armado interno en Tumaco y un correlativo incremento de violaciones a los derechos humanos tanto en el área rural como en la urbana. No obstante, en el marco del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Álvaro Uribe y las AUC, se llevó a cabo el desarme y la desmovilización colectiva del BLS el 30 de julio de 2005 (Rojas-Prieto, 2015, pp. 19-23).

A partir de entonces, se produjo una reconfiguración de los grupos armados ilegales en Tumaco, con el surgimiento de bandas criminales, como la Nueva Generación, las Águilas Negras y Los Rastrojos. Eran organizaciones criminales con poder de fuego suficiente para disputarles a las FARC-EP la producción, el acopio y la comercialización/exportación de cocaína. De hecho, entre 2010 y 2012, Los Rastrojos se convirtieron en la banda criminal predominante en Tumaco, creando fronteras invisibles interbarriales, con redes de informantes, control sobre los intercambios económicos y cobro de extorsiones. Sin embargo, desde el año 2013, la influencia de Los Rastrojos decayó como resultado de los golpes asesados por la Fuerza Pública, lo que llevó al sometimiento a la justicia de sus principales cabecillas y al alistamiento de sus bases en las filas de las FARC-EP (Rojas-Prieto, 2015, pp. 19-23).

Estas nuevas bandas criminales no pueden comprenderse como un simple reciclaje de las AUC. No hacían parte de un proyecto de guerra nacional contrainsurgente. Sus articulaciones con el poder político, las élites económicas regionales y las fuerzas militares eran demasiado limitadas,

porque nunca construyeron una estructura militar de control territorial que les permitiera ejercer un extenso control territorial a lo largo del país ni estaban comprometidos en la guerra contra las guerrillas. Su propósito era el control de los centros de producción y los corredores de cocaína.

Pese a frecuentes episodios de corrupción de autoridades y miembros de la Fuerza Pública, la posición del Estado era la de perseguir las bandas criminales. Los operativos y golpes contra Los Rastrojos, Los Machos y demás organizaciones de este tipo mostraron que era muy difícil categorizarlos como grupos neoparamilitares. Una caracterización de las bandas criminales que surgieron de la desmovilización paramilitar debería centrarse más en esclarecer cómo las organizaciones criminales han sido capaces de reciclar las tecnologías militares y de control social desarrolladas por las AUC, para establecer áreas bajo su dominio desde las cuales explotar negocios como el narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones, etc. De hecho, al liberarse de las jerarquías verticales del secretariado de las FARC-EP y el proyecto revolucionario nacional, las disidencias que surgieron luego de la desmovilización de 2016 tomaron también muchos de estos atributos de las bandas criminales.

El influjo de las FARC-EP en la región se incrementó paulatinamente desde el año 2009, cuando puso en marcha el denominado “Plan Renacer”, que tuvo como propósito reforzar su presencia en zonas periféricas y fronterizas del territorio nacional —entre ellas, el litoral del Pacífico nariñense— y copar las zonas rurales y urbanas abandonadas por actores irregulares desarticulados, como Los Rastrojos. Durante esta etapa, las FARC-EP se trasladaron de sus zonas de retaguardia estratégica hacia la cabecera municipal de Tumaco y a la carretera que conecta a este con Pasto. Además, narcotraficantes centrados en la exportación de cocaína comenzaron a pagar a la columna móvil Daniel Aldana para que se encargara de las demás fases de la cadena: el cultivo, el procesamiento y el transporte, hasta las rutas de embarque de cargamentos (Rocha, 2014, p. 16).

Sin embargo, a raíz del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en 2016, se produjo un nuevo reacomodamiento de los actores armados ilegales en Tumaco, que ahora involucra a estructuras disidentes y desertoras no desmovilizadas de las extintas FARC-EP, y a bandas criminales cuya motivación esencial es hacerse con el control del negocio del narcotráfico que aquella insurgencia casi monopolizó durante un largo período de tiempo.

Dinámica de seguridad pública

Pese al desarme, a la desmovilización y a la reincorporación a la vida civil del grueso de excombatientes de las FARC-EP en el año 2017, algunos frentes decidieron permanecer alzados en armas. El grupo disidente de mayor importancia en la zona rural de Tumaco fue el Frente Óliver Sinisterra (FOS), comandado por alias 'Guacho', quien fue abatido en un operativo desplegado por las Fuerzas Militares en diciembre de 2018.

Por su parte, la estructura armada ilegal más relevante en el casco urbano del municipio fue la Gente del Orden, con quien el FOS se alió para combatir a otra agrupación disidente que operó en la región, denominada las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP). Este último actor armado irregular estuvo liderado por alias 'Don Y' hasta su muerte en noviembre de 2016. Su lugar fue ocupado por alias 'David', quien dirigió a las GUP hasta septiembre de 2018, cuando fue rastreado y dado de baja, junto con su hermano, por la Policía Nacional. A partir de entonces, las GUP fueron comandadas por alias 'Borojó' (International Crisis Group, 2019, pp. 5-7).

Los grupos disidentes mantuvieron ciertas capacidades militares heredadas de las FARC. No se dirigían aquellos a la construcción de un gran ejército revolucionario capaz de derrotar en combates abiertos a las Fuerzas Armadas del Estado, pero sí contaban con capacidades desarrolladas por mandos medios para controlar territorios y población, enfrentarse en combates entre ejércitos en campo abierto con otras organizaciones y monopolizar las rentas del narcotráfico en sus áreas de influencia.

La ausencia del mando unificado y la cohesión que imprimía la disciplina del Secretariado de las FARC sobre los diferentes bloques y frentes, que evitaba la fragmentación de las unidades guerrilleras, se tradujo en muchos enfrentamientos entre las facciones que surgieron de las dinámicas de disidencia al proceso de paz de La Habana. Dentro de esa lógica se hallaban los enfrentamientos entre el FOS y el GUP, y así las diferentes facciones armadas se alineaban en uno u otro bando. Esta lógica continúa al día de hoy con la primacía de los Urías Rondón y la Nueva Marquetalia.

En diciembre de 2018, ambos grupos disidentes —el FOS y las GUP— pactaron una tregua que repercutió en el descenso generalizado del nivel de violencia en Tumaco; en particular, se redujeron los índices de homicidios urbanos. Sin embargo, la tregua se rompió en septiembre de 2020, lo que coincidió con el posicionamiento, en la zona rural, de alias ‘Contador’, un narcotraficante proveniente de la localidad de Llorente, con presunta financiación por parte del cartel mexicano de Sinaloa, que se sumó al conjunto de actores armados ilegales presentes en Tumaco, y quien entabló una confrontación armada con las organizaciones disidentes y desencadenó una nueva ola de combates, homicidios y desplazamientos forzados en la región. ‘Contador’ fue capturado por las autoridades en febrero de 2020. No obstante, todo indica que aquel continuó delinquiendo desde prisión, con una banda criminal conocida como Los Contadores (Johnson, 2021, pp. 1-3).

A finales de 2020, Los Contadores absorbieron a una parte de los integrantes de las GUP. Uno de los principales líderes de este grupo disidente, alias 'El Mocho', fue forzado o decidió voluntariamente unírseles. Por su parte, el originalmente denominado FOS se transformó en el Bloque Occidental Alfonso Cano (BOAC). Este, a su vez, también incorporó a sus filas otra fracción de las GUP, a raíz de que otro de sus cabecillas, alias 'Rocky', se sumó a esta agrupación disidente tiempo antes de que alias 'Borojó' fuera abatido en agosto de 2021. La recomposición de estos grupos armados irregulares tuvo lugar en medio de la pandemia de coronavirus que, por sí misma, no implicó un desescalamiento de las disputas por el control territorial y poblacional de las áreas rurales y urbanas de Tumaco (Johnson, 2021, p. 9).

La situación actual de seguridad en Tumaco se caracteriza por una mutación ulterior de los grupos armados ilegales, divididos en dos grandes bloques enfrentados entre sí: por una parte, la banda criminal Los Contadores, que se trasmutó en el Frente Iván Ríos y que se asoció con el BOAC para fortalecer la incursión en la región de la Nueva Marquetalia, estructura originalmente conformada por guerrilleros de las FARC-EP *desertores* del acuerdo de paz y que está comandada por alias 'Iván Márquez'. El otro bando tiene como eje la columna móvil Urías Rondón, perteneciente al Frente 30, célula que hace parte de una organización *disidente* de mayor envergadura que dirigió alias 'Gentil Duarte' hasta su muerte en 2022 y que ahora es comandada por alias 'Iván Mordisco' (Rodríguez-Álvarez y Galvis, 2022).

En la figura 2.1 se observa que la columna móvil Urías Rondón hace presencia en el territorio que se encuentra entre la frontera con Ecuador y el margen occidental del río Mira, que corre paralelo a la carretera que conecta a Tumaco con Pasto, pasando por el corregimiento de Llorente. Por su parte, del lado oriental del río y de la carretera opera el Frente Iván Ríos, junto con un remanente del antiguo FOS, en inmediaciones del

resguardo indígena Indo Sabaleta, así como en el casco urbano de Tumaco en asociación con el actual BOAC. A su vez, este último ejerce presencia exclusiva sobre ambas orillas del río Rosario.



Figura 2.1. Presencia de grupos armados ilegales en Tumaco

Fuente: Mapa original de La Silla Vacía (2022).¹

¹ En Presencia de grupos armados ilegales en Tumaco. Fuente: Portal digital La Silla Vacía (2022). Disponible en: <https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/pacifico/en-tumaco-la-guerra-contra-las-drogas-de-duque-termina-con-saldo-en-rojo/>.

Distinción entre el entorno rural y urbano

Aun cuando la Fuerza Pública ha asestado golpes contundentes a los diversos grupos armados ilegales que operan en Tumaco, incluyendo capturas y baja de cabecillas, la lucha por el control de los cultivos de coca y los centros de procesamiento, acopio y transporte de cocaína ha causado un sostenido incremento de la violencia en el entorno rural. Particularmente, en las inmediaciones de los ríos Mira, Rosario y Mejicano han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil, especialmente contra las comunidades étnicas.

Es habitual que la órbita de influencia de los actores armados irregulares se superponga con las jurisdicciones de los territorios colectivos de los consejos comunitarios afrocolombianos y de los resguardos indígenas. Las organizaciones insurgentes han recurrido permanentemente a los asesinatos de líderes étnicos como método para amedrentar a las colectividades, socavar su vocación de gobierno autónomo e implantar un orden paralelo por la fuerza. El homicidio de José Jair Cortés, líder del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, comprometido con la sustitución de cultivos ilícitos, asesinado en el año 2017 por sicarios del entonces FOS, es diciente de la situación de derechos humanos en la zona (International Crisis Group, 2019, pp. 24-25).

Los desplazamientos forzados también constituyen una práctica reiterada provocada por los grupos armados ilegales. En el año 2017, cerca de 1500 pobladores afrocolombianos fueron obligados a desplazarse debido al enfrentamiento entre los grupos. En el año 2018, el 90 % de los integrantes del resguardo indígena Inda Guacaray, del pueblo awá, equivalente a 451 personas, fueron forzados a desplazarse por los enfrentamientos. Existe una tendencia pendular en el fenómeno del desplazamiento, en el sentido de

que los núcleos familiares son obligados a trasladarse frecuentemente de un destino a otro en función de la variación de las condiciones de seguridad del sitio donde hayan logrado asentarse. Por esta razón, se los considera como “población flotante”. Además, los desplazamientos de las comunidades afrocolombianas que habitan la ribera occidental del río Mira comúnmente se traducen en una migración transfronteriza forzada, bien sea transitoria o definitiva, hacia el cantón de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas (Ecuador) (Olaya-Requene, 2019, pp. 183, 196).

Los confinamientos de poblaciones también se han incrementado en tiempos recientes. Algunos de ellos ocurren incluso no por la prohibición directa de los grupos armados ilegales de la circulación de los habitantes del lugar, sino como una forma de autorrestricción que adoptan las comunidades por temor o por protección. El confinamiento ahonda las condiciones de marginalidad socioeconómica, al obstaculizar los traslados necesarios para intercambiar productos con otras veredas, proveerse de servicios en el casco urbano de Tumaco o trabajar en territorio de frontera (Olaya-Requene, 2019, p. 197).

Al igual que en las zonas rurales, la confluencia de diversos actores armados ilegales, la persistencia de economías criminales y las precarias condiciones materiales de los habitantes ha producido un deterioro de la situación de seguridad en el casco urbano de Tumaco. Allí la criminalidad está vinculada al control de las rutas de exportación de cocaína —cultivada y procesada en el sector rural— y al dominio de los territorios y poblaciones que le son inherentes a esta fase posterior de la cadena del narcotráfico. De hecho, el elevado índice de homicidios evidenciado en Tumaco en los últimos años está ligado a las disputas entre grupos armados ilegales, en función de apropiarse de sectores estratégicos para el tráfico de cocaína. De hecho, las zonas donde se concentra la mayoría de los asesinatos tienden a coincidir con rutas marítimas, fluviales y terrestres, pero también con sitios próximos a esteros y manglares, como se observa en la figura 2.2, que muestra la frecuencia de homicidios en Tumaco en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2021 (Gutiérrez *et al.*, 2022, pp. 19-20).

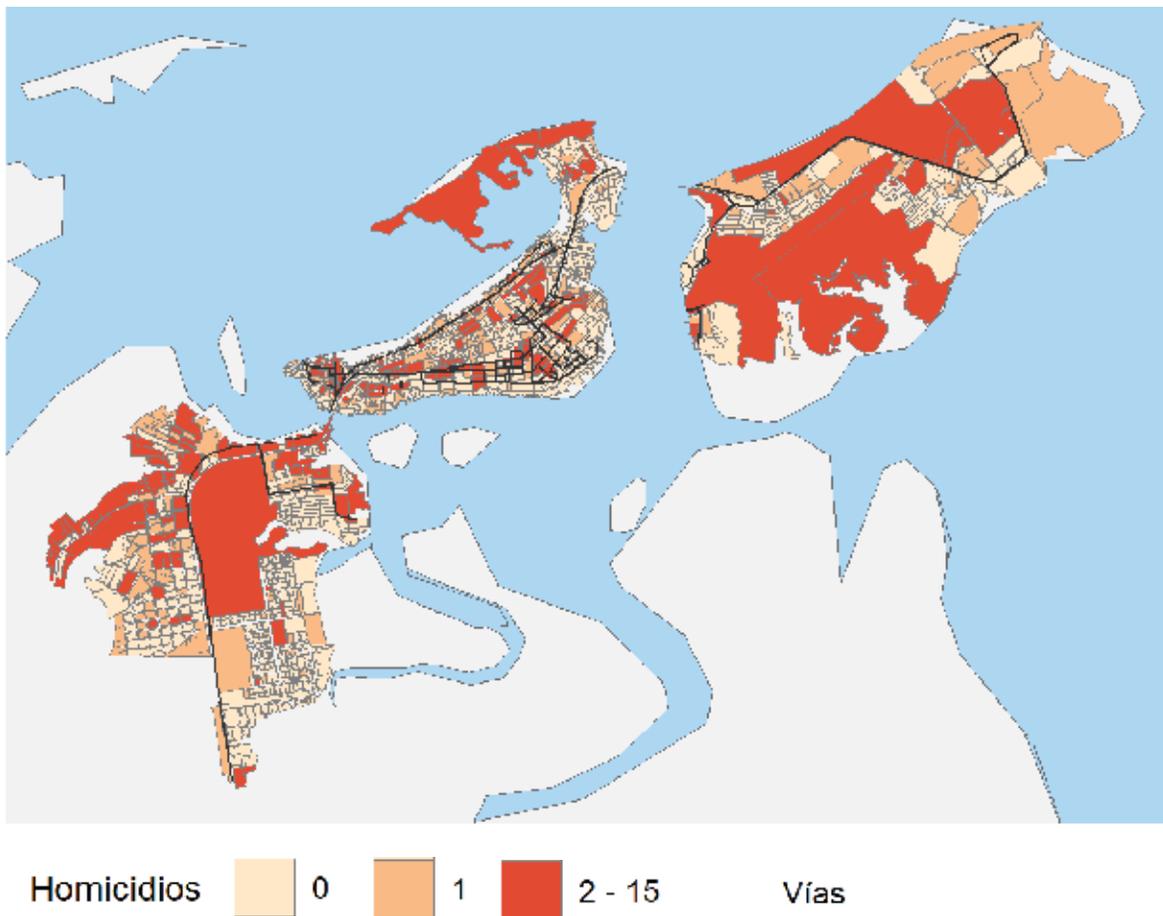


Figura 2.2. Frecuencia de homicidios en Tumaco entre los años 2014 y 2021
Fuente: Gutiérrez *et al.* (2022).

En los últimos años, en el área urbana de Tumaco se han posicionado algunas organizaciones criminales que han pretendido imponer su autoridad sobre la población de manera alterna a las instituciones del Estado. El BOAC estableció, en los sectores bajo su influjo, mecanismos de regulación de circulación y mantenimiento del orden (vigilancia), resolución de disputas comunitarias (justicia) y protección ante delitos comunes (seguridad). Más aún, durante la época más intensa de la pandemia de coronavirus (2020), en los barrios Humberto Manzi y Nuevo Milenio, el BOAC impuso estrictas medidas de confinamiento, restringió la movilidad de sus habitantes e impidió el ingreso de pobladores foráneos. Para garantizar su cumplimiento, intimidó a quienes transgredieran sus directrices con la

imposición de multas. Además, “delegó”, en las Juntas de Acción Comunal (JAC), la resolución de conflictos interpersonales, reservándose el “derecho” a fungir como última instancia, y se cercioró de que delincuentes comunes no incurrieran en extorsiones y de que los episodios de hurtos fueran prevenidos o severamente castigados (Johnson, 2021, pp. 6-7).

Por el contrario, en los barrios controlados por las GUP —agrupación luego devenida en Los Contadores—, como La Paz, Viento Libre y Buenos Aires, la falta de una jerarquía de mando consolidada y la escasez de rentas ilícitas debido al estancamiento del narcotráfico durante la pandemia dio lugar a que el gobierno sobre la población local menguara. Como resultado, las cuarentenas u otras restricciones de movilidad estuvieron ausentes durante la pandemia. Al tiempo, se incrementaron delitos que ocurren en ausencia de procesos de gobernanza criminal como los hurtos, lo que deslegitimó el control de la población civil sometida al GUP (Johnson, 2021, pp. 8-9).

Estado actual de los grupos armados en Tumaco (agosto de 2023)

En lo corrido de 2023, la reconfiguración de los grupos armados ilegales ha seguido su curso en Tumaco y en el Pacífico nariñense, con graves consecuencias humanitarias. El enfrentamiento entre dos grandes bloques se mantiene: por una parte, la triple alianza entre el FOS, Los Contadores y BOAC como soporte de la incursión en la región de los *desertores* de la Segunda Marquetalia (comandada por alias ‘Iván Márquez’); por otra, el Frente 30 Urías Rondón, perteneciente al Comando Coordinador

de Occidente, adscrito a las *disidencias* del Estado Mayor Central (EMC) (al mando de alias 'Iván Mordisco'). Debido al sofisticado armamento que posee —que incluye drones que portan explosivos—, la Segunda Marquetalia ha prevalecido sobre el EMC. Esta nueva distribución en la correlación de fuerzas ha impulsado al primer bloque a erigirse como el detentador del control sobre amplias porciones de Tumaco y la costa pacífica nariñense y, a su vez, ha obligado al Frente 30 Urías Rondón a replegarse en distintas direcciones: principalmente hacia la frontera suroccidental con Ecuador, pero también a las subregiones de Telembí y La Cordillera, y al departamento vecino del Cauca (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz —INDEPAZ— , 2023a, p. 13).

En las áreas donde la Segunda Marquetalia ahora ostenta el dominio territorial, esta se ha esforzado por relegitimarse ante las comunidades étnicas afrocolombianas e indígenas. Utiliza un discurso político que dice reconocer su derecho de autodeterminación y respetar su integridad individual y colectiva.

En paralelo, se ha detectado la presencia de células del ELN al norte de la ruta que conecta a Tumaco con Pasto, lo que resulta novedoso, pues hasta hace poco esta organización insurgente no operaba en el distrito —aunque sí en municipios vecinos, como Barbacoas—. Si bien esta incipiente incursión del ELN no plantea aún una oposición violenta contra los actores armados dominantes, sí pretende apropiarse de rutas de narcotráfico en el Pacífico sur (INDEPAZ, 2023a, p. 14).

Aun así, este nuevo acomodo territorial no está consolidado; por el contrario, en la región limítrofe con Ecuador, en la que se encuentran localizados los consejos comunitarios de Alto Mira y Frontera y Bajo Mira y Frontera, los combates entre las disidencias de las FARC persisten, como ocurre en los resguardos indígenas ubicados a ambos costados de la vía Tumaco-Pasto, al punto de estar causando un deterioro ostensible de la situación de seguridad rural, así como una crisis humanitaria en la que

se hallan sumidas las poblaciones étnicas que allí habitan, por causa de la diseminación indiscriminada de minas antipersonal y otros artefactos explosivos, los cuales son usados por los grupos irregulares para asegurar el perímetro de las áreas conquistadas o como represalia al emprender la retirada, al no poder contener el avance de un actor armado enemigo (INDEPAZ, 2023a, p. 24).

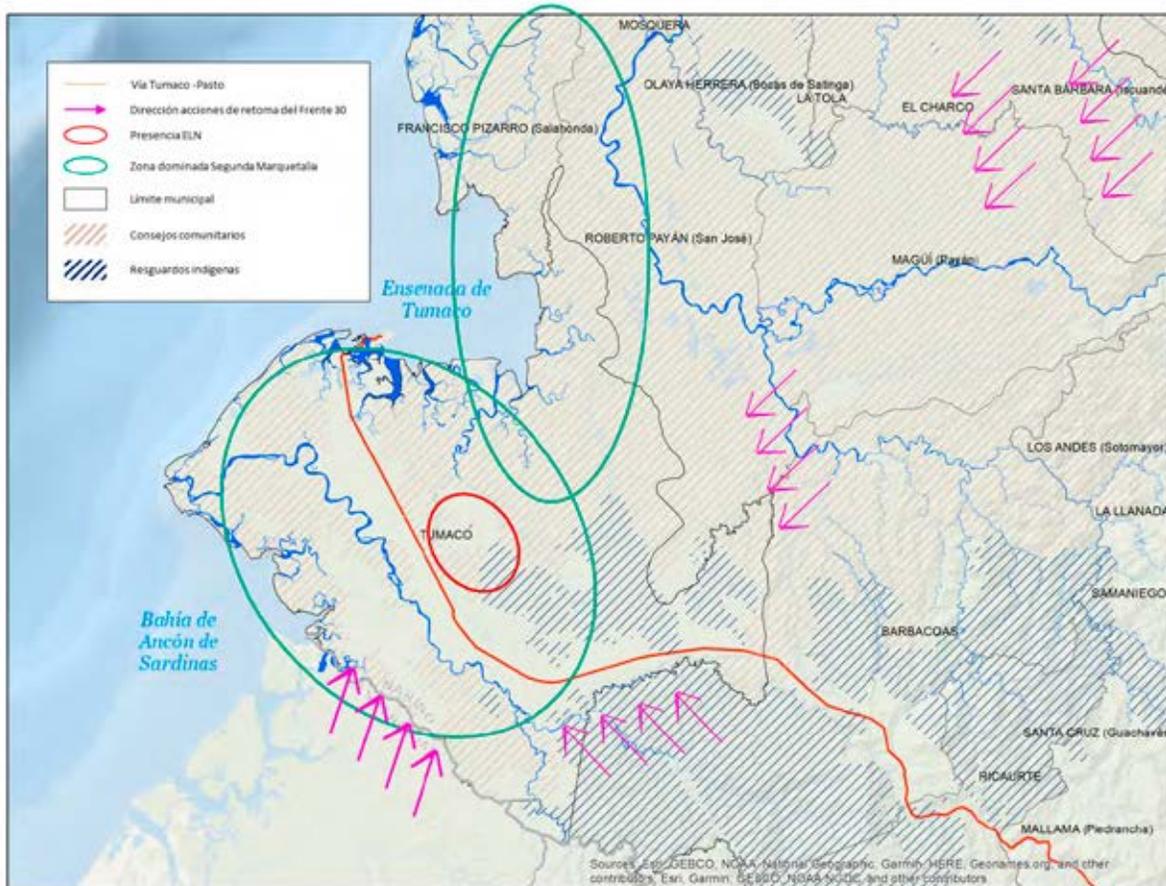


Figura 2.3
Consejos comunitarios y presencia de grupos armados
Fuente: INDEPAZ (2023a).

La situación que se presenta actualmente en la zona, y que se extiende por el margen oeste del río Mira y en las inmediaciones de la vía, refleja la tendencia nacional respecto del uso y abandono de artefactos explosivos. En efecto, durante el año 2022 se registraron 515 víctimas de esta clase de

dispositivos —el número más alto desde la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno nacional en 2016.

Del universo de víctimas del 2022, 278 fueron civiles (incluyendo 43 menores), 224 uniformados de la Fuerza Pública y 13 integrantes de grupos armados ilegales. Además, el departamento de Nariño fue el tercero más afectado en el país, con 46 incidentes (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2023, p. 5). Este tipo de prácticas desplegadas por los grupos armados irregulares no solo constituye una clara infracción al derecho internacional humanitario (DIH), sino también una flagrante vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas y de las comunidades vulnerables en su conjunto.

El enfrentamiento entre las disidencias de la Segunda Marquetalia y el EMC ha resultado en una intensificación tanto de los desplazamientos como de los confinamientos de los habitantes de los consejos comunitarios y resguardos indígenas aledaños, quienes ven impedido su acceso a las cosechas de sus cultivos, a la pesca en las fuentes hídricas de la región e incluso a los centros de salud y a las instituciones educativas en las cabeceras municipales ante el riesgo de las minas antipersonal. Entre noviembre de 2022 y enero de 2023, 18 personas fueron víctimas de tales artefactos solamente en Tumaco, según cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Rivera-Rueda, 2023).

La siembra de minas antipersonal y la proliferación de otros artefactos explosivos no solo ha dificultado el acceso a los colegios situados en zonas rurales de Tumaco, hasta el punto de fomentar la deserción escolar de los menores de edad, sino que también ha sido utilizada como instrumento de presión por los grupos armados ilegales para apuntalar el delito de *reclutamiento forzado* sobre los menores desescolarizados. Esta práctica, opuesta al DIH, ha sido exacerbada por la Segunda Marquetalia, en su afán por apoderarse del territorio fronterizo que se disputa con el EMC,

reclutando combatientes muy jóvenes y con escaso entrenamiento militar, lo que ha ocasionado un aumento en la tasa de mortalidad durante los enfrentamientos armados (International Crisis Group, 2023, pp. 14-16).

Este panorama ha obligado a distintas organizaciones internacionales que hacen presencia en el territorio —especialmente al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia— a llevar a cabo el programa Educación en Riesgo de Minas, con el fin de entrenar y certificar a líderes sociales/comunitarios en la identificación de posibles artefactos explosivos y así aumentar las capacidades de autoprotección de las poblaciones vulnerables.² Por su parte, el Ejército Nacional, en un ejercicio conjunto con las fuerzas militares ecuatorianas, ha realizado labores de *desminado operacional*. Más de 1300 artefactos explosivos han sido desactivados y localizados en los consejos comunitarios de Alto y Bajo Mira y Frontera.³ Dado que subsisten las tensiones y la desconfianza mutua entre las comunidades étnicas y los uniformados, y ante la constante amenaza de retaliaciones por parte de los grupos armados ilegales que operan en la zona, los habitantes rurales abogan por el despliegue exclusivo de actividades de *desminado humanitario*.⁴

La confrontación bélica entre ambos bloques de disidencias también se desarrolla en los límites entre la zona rural y el casco urbano de Tumaco, y atiza el homicidio permanente de líderes sociales/comunitarios. Este fenómeno lo ejemplifica el caso de Mariela Marínez, presidenta de la JAC, promotora de salud del Hospital Divino Niño y lideresa comprometida con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), quien fue asesinada el pasado 26 de marzo de 2023, con casi 70 años de edad, por 11 impactos de fusil frente a su casa, en el corregimiento de Bucheli, localizado en las afueras de la cabecera municipal, y donde vivió por cerca de 25 años. Aunque había sido declarada “objetivo militar” por el Frente 30 Urías Rondón, aún debe esclarecerse

² Entrevista con líderes sociales/comunitarios de Tumaco.

³ Entrevista con uniformados de la Fuerza Pública de Tumaco.

⁴ Entrevista con lideresa social/comunitaria de Tumaco.

si quien ordenó el asesinato fue el Comando Coordinador de Occidente adscrito al EMC o estructuras aliadas a la Segunda Marquetalia (Pardo-Quintero, 2023a).

De lo que no cabe duda es de que esta modalidad de violencia homicida socava la capacidad de agencia, articulación y acción individual y colectiva de las comunidades rurales y urbanas de Tumaco y de toda la costa pacífica nariñense, al tiempo que sirve de mensaje vicario, transmitido por los actores armados irregulares, bien para reforzar la pretensión de dominio sobre el territorio y la población, bien para intentar imponer condiciones a organizaciones rivales en zonas en disputa (International Crisis Group, 2023, p. 7). Este tipo de asesinato selectivo responde también a una lógica de silenciamiento y de eliminación de fuentes de resistencia pacífica que desafían el poder de los actores armados ilegales, como las mismas comunidades étnicas lo identifican.⁵ Solo en el primer semestre de 2023, organizaciones internacionales como Human Rights Watch han verificado el asesinato de 77 líderes sociales/comunitarios en Colombia, de los cuales 6 han ocurrido en el departamento de Nariño y 4 en Tumaco.

Por su parte, la situación de seguridad de los excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación también plantea grandes retos. A pesar de que la Sentencia de Unificación su-020 de 2022, proferida por la Corte Constitucional, declaró un “estado de cosas inconstitucional” por causa de la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de la población reincorporada, los 53 excombatientes (20 mujeres y 33 hombres, y sus respectivas familias) que aún habitan el así llamado Espacio Transitorio de Capacitación y Reincorporación de “La Variante”, localizado en la zona rural de Tumaco, continúan siendo *estigmatizados* por las organizaciones disidentes por haber decidido abandonar la lucha armada. En consecuencia, corren el riesgo de ser reclutados nuevamente o de sufrir atentados en contra de su vida e integridad personal.⁶ En efecto, desde

⁵ Entrevista con líderes sociales/comunitarios de Tumaco.

⁶ Entrevista con excombatientes reincorporados de Tumaco.

la firma del Acuerdo de Paz (2016), Tumaco registra el mayor número de reincorporados asesinados, con 18, y Nariño es el segundo departamento del país, con 40 (INDEPAZ, 2023b, p. 3).

En todo caso, resulta imprevisible el rumbo que tomará en el corto plazo el proceso de reacomodamiento de los actores armados ilegales. No existe certeza de qué tan estables son las alianzas entre las estructuras criminales que han llevado al predominio de la Segunda Marquetalia sobre el EMC, ni es predecible el comportamiento de ambas disidencias ante los procesos de paz paralelos que el Gobierno nacional ha entablado en procura de alcanzar *acuerdos humanitarios* que reduzcan los índices de violencia. Tampoco está claro si estos arreglos se circunscribirán únicamente a un *cese el fuego* por parte de los grupos armados ilegales o si también comprenderá un *cese de hostilidades* que garantice la no victimización de las comunidades vulnerables, o incluso la suspensión de las actividades de financiación de su accionar delictivo, en especial el narcotráfico.⁷

⁷ Entrevista con funcionario de la Personería de Tumaco.

C A P Í T U L O T R E S

TUMACO COMO PARADIGMA DE ENCLAVE PRODUCTIVO

ES

Panorama de la cadena de narcotráfico

La región del Pacífico se consolidó como el territorio nacional con mayor número de hectáreas cultivadas con hoja de coca en Colombia, alcanzando, en 2021, 89 266 hectáreas, que componen el 44 % del total nacional. Con relación al año anterior (2020), el cultivo en la región del Pacífico aumentó el 76 %, cifra récord en dos décadas de monitoreo. Por su parte, en Nariño, se duplicó el número de cultivos, alcanzando 56 516 hectáreas. Del total de hectáreas sembradas en la región del Pacífico, el 40 % se concentran en los municipios de El Tambo (Cauca) y el Charco y Tumaco (Nariño) (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —UNODC—, Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos —SIMCI—, 2022, p. 96). En particular, Tumaco ha figurado consistentemente como una de las localidades con mayor número de hectáreas de hoja de coca sembradas en el país en los últimos años. Entre 2008 y 2017 fue el municipio con mayor cantidad de cultivos del país. Incluso, en los años 2015 y 2016, los cultivos en Tumaco representaron el 15,8 y el 17,6 % del total de hectáreas sembradas en Colombia (Gutiérrez *et al.*, 2022, pp. 4-5).

Actualmente, como se observa en la figura 3.1, la mayor densidad de cultivos ilícitos se concentra en dos puntos de la zona rural de Tumaco: en las inmediaciones del resguardo indígena Indo Sabaleta, ubicado al oriente de la carretera que conecta a Tumaco con Pasto, y en el sector contiguo al corregimiento de Llorente, en un área que circunda la parte alta del río Mira y que se extiende hasta la frontera con Ecuador.

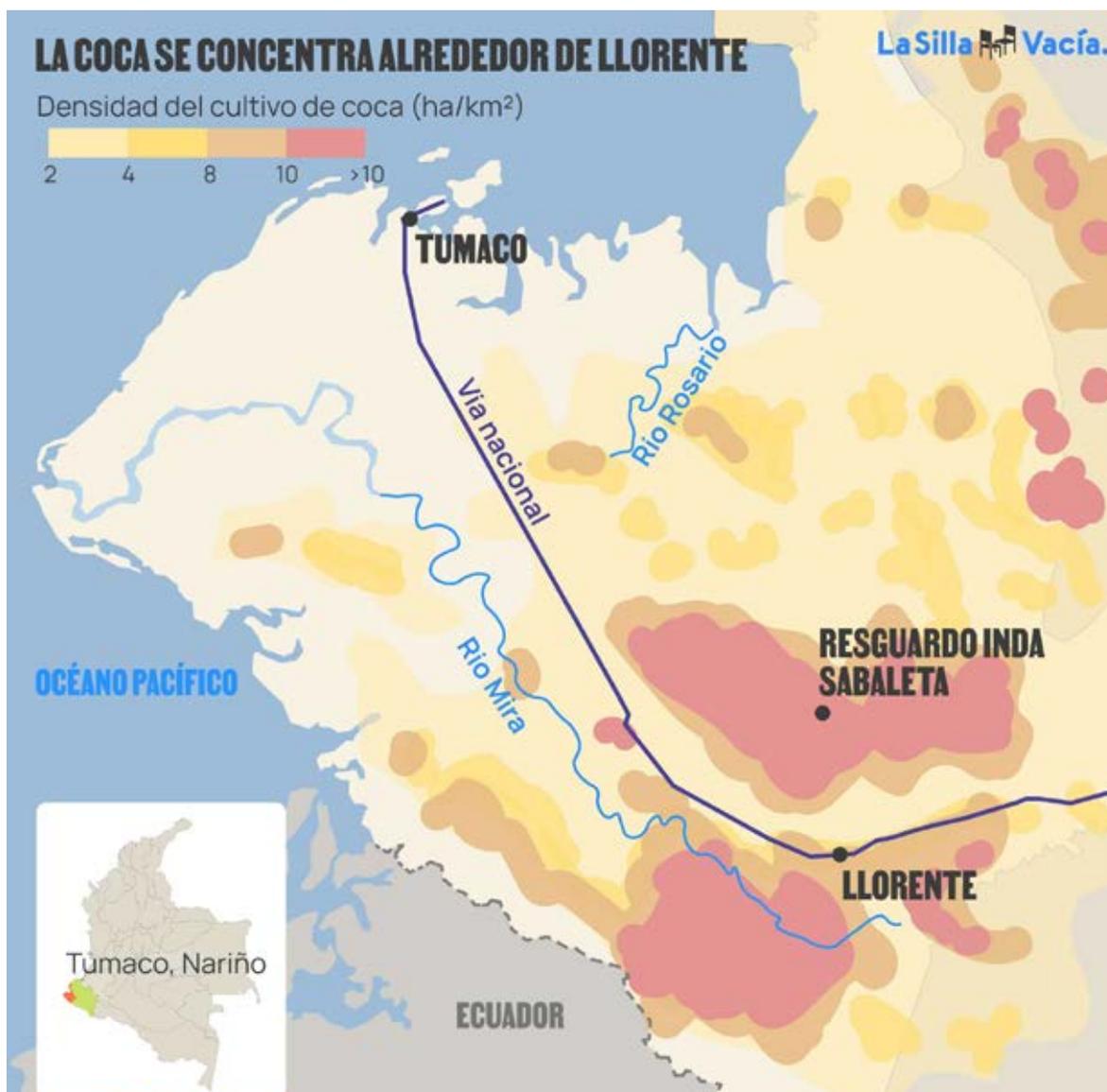


Figura 3.1. Puntos de concentración de cultivos ilícitos en Tumaco
Fuente: La Silla Vacía (2022).⁸

Alrededor del territorio de Tumaco convergen todas las fases de la cadena de narcotráfico. El municipio ha sido clasificado como uno de los 14 *enclaves productivos* identificados en el país, 9 de los cuales se encuentran también localizados en la región del Pacífico (UNODC, SIMCI, 2022, pp. 96-97).

⁸ En Presencia de grupos armados ilegales en Tumaco. Fuente: Portal digital La Silla Vacía (2022). Disponible en: <https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/pacifico/en-tumaco-la-guerra-contra-las-drogas-de-duque-termina-con-saldo-en-rojo/>.

Diversos motivos han llevado a Tumaco a convertirse en un enclave productivo del tráfico de cocaína. Su privilegiada posición geográfica juega paradójicamente en su contra. Factores como: 1) estar ubicado en la frontera suroccidental limítrofe con Ecuador —que ha sido históricamente permeada por grupos armados ilegales—, 2) erigirse como el segundo puerto náutico en importancia en la costa pacífica, y 3) estar atravesado por afluentes como los ríos Mira, Rosario y Mejicano, que discurren desde el interior del territorio hasta desembocar en el mar, convierten al municipio en un corredor estratégico para la exportación de cocaína (Arroyave-Quintero y Santamaría-Benavides, 2017, pp. 165-166).

En la base de la pirámide se encuentran los cultivadores. Estos son pobladores rurales (campesinos, afrocolombianos e indígenas) que aglutinan la mano de obra para la siembra de hoja de coca. En su mayoría, son personas con altos índices de necesidades básicas insatisfechas que optan por dedicarse a los cultivos ilícitos por la falta de otro medio de subsistencia o directamente por presión de los grupos armados ilegales. Estas organizaciones les facilitan insumos y precursores químicos. El control que ejercen sobre el territorio, así sea sumamente opresivo, proporciona ciertas condiciones de seguridad a las comunidades cocaleras (UNODC, SIMCI, 2022, p. 45).

En este contexto, los cultivadores han aumentado la capacidad productiva de hoja de coca, hasta alcanzar una densidad promedio de 7900 plantas por hectárea, a partir de la tecnificación de los métodos de siembra, como la diversificación y mezcla de distintas variedades de plántulas, y la optimización de agroquímicos y pesticidas. Se estima que en la región solo el 15 % de los cultivadores tienen su propia infraestructura para extraer el alcaloide, mientras que el restante 85 % vende su cosecha a terceros que la procesan (UNODC, SIMCI, 2022, pp. 102-103).

Los grupos armados organizados que hoy operan en Tumaco carecen casi por completo de motivaciones políticas, como años antes las tuvieron

las agrupaciones guerrilleras y paramilitares. Prima una racionalidad fundamentalmente económica, que apunta a la obtención de rentas ilícitas producto del narcotráfico, aprovechándose de la profunda fragilidad institucional del Estado, que continúa sin monopolizar el uso de la fuerza en el territorio (UNODC, SIMCI, 2022, p. 48).

Para dar una idea de la fragilidad institucional, en Tumaco, para el año 2018, solo había dos fiscales a cargo de investigar más de 500 casos, incluyendo hechos violentos relacionados con homicidios. Además, únicamente existía un fiscal especializado para investigar otros delitos graves, como desapariciones, desplazamientos forzados y extorsiones. Los niveles de impunidad son altísimos (Gutiérrez *et al.*, 2022, p. 10).

Los actores armados irregulares fungen como los reguladores de los derechos de propiedad y de participación en el negocio que conectan los diversos eslabones de la cadena del narcotráfico, por cuanto 1) vigilan las plantaciones de hoja de coca y financian la tecnificación de dichos cultivos ilícitos que siembran las comunidades rurales, y 2) controlan las rutas terrestres y fluviales de transporte de la droga acopiada, así como las rutas marítimas de embarque de los cargamentos a ser exportados. En otras palabras, los actores armados ilegales son el regulador de la producción de la materia prima, del proceso de elaboración del producto final y de su embarque hacia el mercado exterior (Gutiérrez *et al.*, 2022, p. 67).

Por su parte, existen narcotraficantes colombianos y extranjeros que organizan la financiación de los laboratorios, la construcción de semisubmersibles y demás infraestructura de transporte hacia el destino final en el extranjero, y la entrega de dinero en efectivo en la zona al grupo armado (dado que no hay bancos en muchas áreas rurales, el dinero tiene que ser transportado físicamente hasta allá). Los carteles mejicanos, como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, hacen una fuerte presencia en Tumaco a través del método de “emisarios” que garantizan la provisión de cocaína hacia México. Los emisarios actúan como interlocutores válidos ante los

grupos armados ilegales. Son enviados para garantizar niveles óptimos de calidad, cantidad y tiempo de entrega (Gutiérrez *et al.*, 2022, p. 103). Aun así, la pretensión de los carteles transnacionales y de los narcotraficantes colombianos en ningún caso es disputarles a los grupos armados ilegales el control territorial, sino que su racionalidad es netamente instrumental: se circunscribe a asegurarse de que tanto la oferta de cocaína como su calidad se mantengan, para proveer a sus clientes en el mercado internacional (Gutiérrez *et al.*, 2022, pp. 65-66).

Fluctuaciones en la cadena de valor

En la región del Pacífico, los precios de la cadena de valor del narcotráfico en el año 2021 se redujeron en comparación con el 2020: 1 kg de hoja de coca costaba cop 2300, lo que representó una disminución del 21 %; 1 kg de pasta base se tasaba en cop 1 648 400, una rebaja del 19 %; 1 kg de base de cocaína valía cop 2 406 100, un 4 % menos, y 1 kg de clorhidrato de cocaína se vendió por cop 4 123 400, una reducción también del 4 % (Gutiérrez *et al.*, 2022, p. 97).

Este descenso generalizado en los eslabones de la cadena de cultivo-producción-venta de cocaína en la región Pacífico contrasta con el comportamiento de dos fenómenos internacionales estrechamente vinculados con el negocio del narcotráfico: por una parte, el incremento de la demanda global de cocaína fue del 22 % entre el año 2010 y 2019; hoy existen alrededor de 20 000 000 de consumidores en el mundo (UNODC, 2021). Este aumento sostenido de la demanda agregada no se ha reflejado en el alza de los precios en la región. Por el contrario, la tendencia

actual a la baja sigue un patrón que viene desde el año 2005, cuando los precios de la hoja de coca, la pasta base y el clorhidrato de cocaína ascendían a COP 3750, COP 2 270 800 y COP 5 284 300, lo que implica una variación negativa del 38,7, el 27,4 y el 22 % respectivamente, en relación con el 2021. De hecho, el único rubro que incrementó entre los años 2005 y 2021 fue la base de cocaína, la cual elevó su valor tan solo en un 6 % (UNODC, SIMCI, 2022, p. 104).

Por otra parte, en el año 2021, el peso colombiano se devaluó el 43,5 % en relación con el dólar estadounidense. Esta desvalorización de la moneda local supone un incentivo muy potente para exportar cocaína, pues la monetización nacional de los dólares recibidos producto del narcotráfico aumenta considerablemente las utilidades de los traficantes y grupos armados ilegales (UNODC, SIMCI, 2022, p. 35). Estos podrían reinvertir los réditos excedentes para financiar otros eslabones de la cadena, cooptar autoridades públicas o consumir bienes y servicios locales. Sin embargo, la devaluación tampoco repercutió en el incremento de los precios en la región del Pacífico.

De lo anterior se infiere que las fluctuaciones económicas en la cadena de valor del tráfico de cocaína no están estrictamente determinadas por las reglas del capitalismo racional-legal, es decir, por la ley de oferta y demanda, o la tasa de cambio. Por el contrario, dado que el narcotráfico es, en esencia, un negocio ilícito, en la fijación de los precios de las distintas fases de la cadena inciden factores circunscritos al uso de la fuerza. En efecto, el sometimiento de las poblaciones rurales a la coerción impuesta por los grupos armados ilegales que controlan los territorios donde se siembra la hoja de coca da lugar a que estas organizaciones criminales no tengan la necesidad de incentivar la plantación de cultivos ilícitos a cambio del pago de un precio mayor.

La situación anterior la ilustra un líder indígena del pueblo awá del resguardo Inda Sabaleta, próximo al corregimiento de Llorente, en la zona

rural de Tumaco, quien describe que al valor de 1 kg de pasta de cocaína, que cuesta aproximadamente COP 2 600 000, debe restarle los siguientes gastos: 200 000 para los abonos de los cultivos, 400 000 para el pago de los raspachines, 300 000 para los insumos para el procesamiento, 100 000 para el pago del jornal del químico que procesa la hoja de coca, 600 000 por 20 galones de gasolina y 500 000 como *impuesto de gramaje* que cobran las disidencias de la columna móvil Urías Rondón del Frente 30, que es el grupo armado ilegal que controla el territorio. Así las cosas, la utilidad neta por kilogramo de pasta de coca se reduce a COP 500 000. De todas maneras, la necesidad que tienen las comunidades de los ingresos ha llevado a que en ocasiones estas se contrapongan a las autoridades estatales en sus esfuerzos de erradicación (Rodríguez-Álvarez y Galvis, 2022).

Las condiciones de seguridad de la zona indican sobre la cadena de valor en una doble vía: si un actor armado ilegal logra erigirse como autoridad *de facto* sobre el terreno, esto se traduce en una reducción de los costos de transacción, por cuanto rebaja el precio a pagar a los cultivadores, estandariza el impuesto de gramaje y facilita las negociaciones con los traficantes transnacionales (Duncan-Cruz, 2022); si, en cambio, existe una disputa por el gobierno territorial entre grupos irregulares o por causa de operaciones adelantadas por la Fuerza Pública, la provisión de seguridad criminal se inserta como un rubro más en los costos de producción, lo que repercute en el encarecimiento de toda la cadena de valor del narcotráfico (UNODC, SIMCI, 2022, pp. 80-81).

Por último, en la variación del precio del producto final fabricado en los laboratorios —clorhidrato de cocaína— incide el que presuntamente existe una estratificación de tres tipos distintos de calidades según los destinatarios: 1) el “King”, que es el de mayor pureza y que se exporta a Estados Unidos y Europa, 2) el “Premium”, que es de calidad intermedia y que se envía a Centro y Suramérica, y 3) el de más baja pureza, que se emplea en la distribución y el consumo nacional (UNODC, SIMCI, 2022, p. 104).

Repercusiones socioeconómicas

Las rentas provenientes del narcotráfico se han convertido en el principal motor de la economía de Tumaco. En especial en las áreas rurales, en una proporción demasiado significativa, la principal fuente de ingresos para satisfacer la demanda proviene de los cultivos y demás actividades en torno a la producción y el transporte de cocaína. La dependencia se plasma en los recurrentes conflictos que se han presentado entre las comunidades indígenas y afrocolombianas y la Fuerza Pública cuando ocurren operativos de erradicación manual de cultivos ilícitos en los territorios colectivos donde residen las comunidades étnicas (Arroyave-Quintero y Santamaría-Benavides, 2017, pp. 177-178).

Los traficantes, además, han accedido a un mayor valor agregado de la cadena de producción, debido a la construcción de infraestructuras de menor envergadura que los cristalizaderos de cocaína dedicadas a las fases intermedias de procesamiento de la coca. Son pequeñas edificaciones que se caracterizan por ser móviles o itinerantes, y que pueden llegar a estar en funcionamiento las 24 horas del día. Dado que los pobladores rurales se vinculan a esta fase de la cadena en actividades como la construcción, la adecuación, el desmontaje y el traslado de estos laboratorios, las comunidades perciben estas actividades como fuentes de empleo dinamizadoras de la economía local (UNODC, SIMCI, 2022, p. 76).

La fuerte dependencia que tienen las comunidades étnicas rurales de los flujos de dinero provenientes de la economía de la coca queda patente en varias entrevistas, como la de un líder indígena del pueblo awá, quien aseveró que

Acá en Tumaco solo hemos tenido un gobierno los últimos años: la coca. La gente en las comunidades tiene una placa huella [rieles en las vías], un colegio o un puente por la plata que da ese cultivo. Hace falta que se le quite esa responsabilidad a la coca y la asuma el Gobierno. (Bravo, 2022).

La población urbana de Tumaco se involucra más en la fase final de la cadena del narcotráfico, en el embarque de cargamentos con destino al exterior por medio de lanchas o botes encubiertos que depositan la carga en barcos de mayor envergadura en altamar. Este proceso es llevado a cabo esencialmente por jóvenes originarios de zonas marginales con altas tasas de desempleo. Allí, el transporte de cocaína se ha convertido en una fuente de sustento y ascenso social de las comunidades, a pesar de los riesgos que implica, bien sea de ser asesinados o de ser capturados por las autoridades (Johnson, 2019, p. 7). Como lo señala Lucía Angulo, habitante local:

Es difícil que un joven en Tumaco le diga “no” a los criminales que le ofrecen ser sicario con un sueldo de 200 dólares al mes o viajar con cocaína. Los jóvenes en este pueblo no tienen más opciones, la pobreza y la falta de oportunidades los hace presa fácil de los delincuentes. (Olaya-Requene, 2019, pp. 198-199)

Por la magnitud de los ingresos del narcotráfico existe una subordinación de la economía legal a la ilegal, que se explica, a su vez, por la combinación de fragilidad institucional y el aislamiento de Tumaco de los mercados lícitos. La subordinación se traduce en una ilusoria prosperidad en los mercados locales, que se abastecen de bienes y servicios nunca antes disfrutados por sus habitantes. También se siente en que la “bonanza” producida por el narcotráfico ha atraído población foránea (UNODC, SIMCI, 2022, p. 75).

El corregimiento de Llorente es un ejemplo de cómo el mercado local gira directa o indirectamente en torno al negocio de la coca. El dinero producto de la ilegalidad ha propiciado una oferta de todo tipo de bienes de consumo, como electrodomésticos, vehículos, teléfonos móviles, entre

otros. Desde hace años, diásporas de habitantes venidos del departamento contiguo de Putumayo se han asentado en el territorio, atraídos por el auge de la economía local (Johnson, 2019, p. 6). Así, Llorente y otras localidades de Tumaco encarnan casos paradigmáticos de *acceso a mercados globales* por parte de sociedades periféricas que se soportan casi exclusivamente en el negocio de la coca, lo que de manera consciente e inconsciente legitima socialmente a los actores criminales que controlan los territorios y el narcotráfico (Duncan-Cruz, 2022, p. 28).

El progresivo arraigo de una cultura de la ilegalidad en la idiosincrasia de la población dificulta la tarea del Estado y sus instituciones en su esfuerzo por asegurar el cumplimiento de la ley. La interacción entre los habitantes locales y los grupos armados ilegales que imponen sus reglas en los territorios donde se desarrolla la cadena del narcotráfico socava el papel del Estado como detentador del monopolio de la fuerza legítima, organizador de la economía y proveedor de bienestar. En suma, obstruye la consolidación del proyecto de construcción de Estado en el territorio (UNODC, SIMCI, 2022, p. 82).

Estancamiento del mercado de base de coca (primer semestre de 2023)

Desde finales del año anterior y principios de este año (2023) se ha presentado un estancamiento en la demanda de base de coca para fabricar cocaína en diversas zonas del país, incluyendo a Tumaco. El municipio ha pasado de ser un enclave productivo del narcotráfico a constituirse en un

gran centro de almacenamiento de enormes cantidades de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína, a la espera que narcotraficantes nacionales y extranjeros compren la mercancía.

El represamiento obedece a diversos factores. De un lado, la intensificación de las confrontaciones entre los dos principales bloques disidentes que se disputan el territorio —la Segunda Marquetalia y el EMC— ha creado un escenario de incertidumbre para la compra-venta de la pasta base y del clorhidrato de cocaína. No existen condiciones de seguridad mínimas para llevar a cabo las transacciones usuales en estas fases del negocio, ni para montar laboratorios. De hecho, los riesgos de seguridad han provocado la ausencia de los intermediarios encargados de comprar la base de coca a los cultivadores y procesadores de pasta base y de vender esta a los narcotraficantes. Actualmente, funciona una interlocución directa entre los grupos armados irregulares que controlan la zona y los narcotraficantes, quienes deben pagar adicionalmente un impuesto de gramaje para hacer la operación (INDEPAZ, 2023b, p. 12). El resultado es un mercado menos fluido de la base de coca.

De otro lado, el inusitado aumento del precio de los precursores para el procesamiento de la pasta base de coca y la producción del clorhidrato de cocaína ha incidido también en la parálisis del negocio. Algunos insumos han alcanzado niveles de costos prohibitivos para los campesinos cultivadores y procesadores de base de coca. El alza se debe a que la inflación generalizada y la devaluación del peso colombiano han encarecido sobremanera la compra de insumos, muchos de los cuales son adquiridos de contrabando en la frontera con Ecuador, cuya economía está dolarizada. Más aún, el creciente incremento del precio de la gasolina en Colombia ha incentivado las perforaciones ilegales del Oleoducto Trasandino —que desemboca en Tumaco—, con el fin de extraer el crudo utilizado para fabricar cocaína (Gallo Buraye y Martínez Suárez, 2023, p. 3).

Por último, la sobreoferta de pasta base de coca y de clorhidrato de cocaína producto del aumento de los cultivos y su tecnificación resulta ser un factor decisivo para acelerar la tendencia a la baja del precio de toda la cadena de valor del narcotráfico. Esta situación ha desestimulado a los campesinos cultivadores y procesadores, pues los ingresos obtenidos ya no les alcanzan para su sustento mínimo: el precio de 1 kg de pasta base se transa en promedio por COP 2 000 000, muy cerca del riesgo de trabajar por debajo de los costos de producción. Esto explica por qué se están abandonando los cultivos y almacenando las provisiones de hoja de coca, pasta base e incluso de clorhidrato de cocaína (INDEPAZ, 2023b, p. 19). En la figura 3.2 se muestra la cantidad de clorhidrato de cocaína almacenado en caletas de los Grupos Armados Organizados residuales -GAO(r)- en Tumaco, años 2013 a 2021.

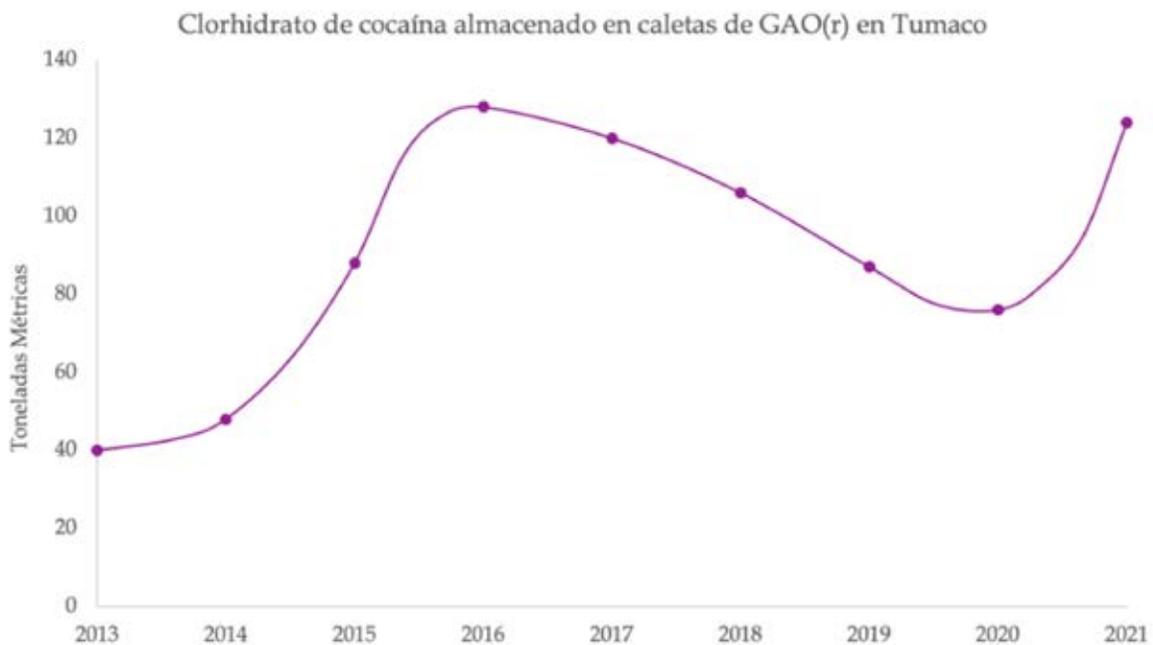


Figura 3.2. Clorhidrato de cocaína almacenado en caletas de GAO(r), en Tumaco, 2013-2021
Fuente: Gallo Buraye y Martínez Suárez (2023).

Las repercusiones socioeconómicas de este represamiento de la cadena son notorias. Al ser Tumaco todavía un enclave productivo, la región exhibe una intensa dependencia económica en el negocio del narcotráfico. Esto implica que el impacto no solamente se limita a la privación de ingresos básicos de las familias campesinas, afrocolombianas e indígenas involucradas en las fases primarias del proceso productivo, sino que también abarca la interrupción del flujo de liquidez proveniente de las rentas ilícitas generadas por los eslabones más rentables de la cadena. Todo esto lo retrata un líder indígena cuando afirma que

La coca es la única empresa que ha generado tanto empleo en Tumaco. Ha sido sostenible y garantista. La gente ha podido mejorar su calidad de vida, enviar a sus hijos a estudiar, arreglar su vivienda. Hoy eso está bloqueado. (Bravo y Rodríguez-Álvarez, 2023)

Más aún, el declive de la posición de Tumaco como enclave productivo que engloba todas las etapas de la cadena de valor del narcotráfico comienza a evidenciarse. Se refleja en el almacenamiento de la producción que por varios años fue despachada a un ritmo proporcional a la que era fabricada. Como lo sintetiza Uberley Ramírez, director de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense: “En otras palabras, pasamos de ser autopista a alacena de los narcotraficantes y todos los interesados en la coca” (Pardo-Quintero, 2023b). El fenómeno se agrava, debido a que la zona portuaria del distrito ha empezado a perder protagonismo como epicentro de embarque de cargamentos de cocaína al exterior. La cada vez más eficaz incautación de estas mercancías ilícitas por parte de la Fuerza Pública y otras autoridades ha llevado a que las rutas fluviales y marítimas situadas en territorio ecuatoriano se hayan convertido en los trayectos predilectos para los narcotraficantes (UNODC, 2023, p. 52).

El desplome de la rentabilidad de la cadena de valor del narcotráfico en Tumaco ha generado que, en los municipios vecinos que conforman el denominado Triángulo de Telembí (Barbacoas, Magüí Payán y Roberto

Payán), haya resurgido el interés de los grupos armados irregulares por explotar otro tipo de economías ilícitas, principalmente la minería ilegal de oro. Esto ha obligado a las organizaciones criminales a reclutar más combatientes, pues se han intensificado las disputas por el control de las dragas. La consecuencia ha sido un proceso de migración de doble vía: habitantes autóctonos que huyen de la zona para proteger su integridad, renunciando a su fuente de ingresos como mineros artesanales (informales), y foráneos que llegan como mano de obra de los actores armados ilegales (INDEPAZ, 2023b, p. 22). Además, la extracción ilícita de yacimientos mineros ha ocasionado la contaminación con mercurio de los ríos que recorren los tres municipios, lo que causa un deterioro medioambiental de las fuentes hídricas de donde las comunidades extraen, en gran parte, su sustento alimenticio.⁹

De cualquier forma, la parálisis del negocio del narcotráfico en Tumaco ocasiona no solo consecuencias negativas. Por el contrario, esta problemática representa una ventana de oportunidad única para reemprender programas de sustitución de cultivos de uso ilícitos que sean exitosos y sostenibles en el tiempo. Las comunidades que tradicionalmente se han dedicado al cultivo y procesamiento de la hoja de coca ahora ya no encuentran ningún estímulo para continuar ligadas a una económica ilegal que no les reporta beneficios económicos, pero que sí las somete a violencia y victimización. Esto ha hecho que el imaginario colectivo de los habitantes se esté transformando, como queda patente en la apreciación de una tumaqueña que cultivó hoja de coca durante 15 años y quien, sin embargo, reconoce que ahora

Vemos en nuestro pueblo un deseo colectivo de aprovechar nuestros cultivos. Es que si lo miramos desde los números no nos da ... la coca ya no es rentable, los narcos están temblando por eso y su única salida es amenazarnos para que sigamos con su mercado. (Pardo-Quintero, 2023b).

⁹ Entrevista con uniformados de la Fuerza Pública en Tumaco.

No obstante, la sola predisposición favorable de la población no basta para llevar a cabo una transformación socioeconómica de tan hondo calado luego de haber sido Tumaco un enclave productivo de narcotráfico durante más de dos décadas. Esto lo demuestran los inconvenientes que se han presentado en la implementación del PNIS. Aunque el porcentaje de resiembra de los cultivadores que se han adscrito al programa ha sido marginal, los retrasos en los pagos a las familias que han cumplido con la sustitución —por causa del agotamiento de la financiación del programa, la corrupción en los funcionarios públicos encargados de administrar los recursos y la ausencia de dolientes proactivos— ha generado que las familias antes cultivadoras carezcan de una fuente actual de subsistencia económica.¹⁰

A la precaria situación en la que se encuentran las familias cultivadoras comprometidas con el PNIS también contribuye la falta de capacidades técnicas y la escasa coordinación interinstitucional de las agencias del Estado encargadas de apuntalar alternativas económicas en el marco de la legalidad. Los *proyectos productivos* propuestos responden a ciclos cortos que no son sostenibles en el mediano y largo plazo —entre otros factores—, debido a la ausencia de estudios de mercado que aseguren compradores interesados en sus productos, a la falta de mecanismos para su comercialización y a la sobreoferta de estos. Incluso, elementos exógenos, como los derrames del crudo usado para procesar la coca por los grupos armados ilegales y fenómenos naturales como el desbordamiento de ríos que arrasan los cultivos plantados, también interfieren con la sostenibilidad de los proyectos productivos.¹¹

Además, el intercambio de bienes y servicios en la frontera con Ecuador —en particular, en la provincia colindante de Esmeraldas— ha menguado ostensiblemente. Esto es consecuencia de que los grupos armados ilegales que operan a ambos lados de la frontera recurren al cobro de extorsiones: quien quiera ejercer el comercio se ve forzado a pagar por partida

¹⁰ Entrevista con lideresa de sustitución de cultivos de uso ilícito de Tumaco.

¹¹ Entrevista con lideresa de sustitución de cultivos de uso ilícito de Tumaco.

doble.¹² Más aún, los esteros y manglares que se encuentran en territorio de frontera ahora también son utilizados por los actores armados irregulares y por organizaciones narcotraficantes para levantar laboratorios de clorhidrato de cocaína y como plataforma de lanzamiento de semisumergibles cargados con cocaína.¹³

Así pues, para que los proyectos productivos que se formulen en el marco de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito sean exitosos, se requiere: 1) un acompañamiento del Estado a las comunidades cultivadoras, mediante la provisión de condiciones mínimas de seguridad territorial por parte de la Fuerza Pública, y 2) una asistencia socioeconómica de otras entidades estatales y del sector productivo que viabilice alternativas legales para generar estándares de vida dignos y oportunidades de trabajo estable. Uberley Ramírez, líder social de Tumaco, lo puso en estos términos al portal *La Silla Vacía*: “Las comunidades afro e indígenas ya no ven rentabilidad en la coca, pero mientras haya necesidades básicas insatisfechas no vamos a hacer mucho. Con hambre no se piensa muy bien” (Bravo y Rodríguez-Álvarez, 2023).

En todo caso, este tipo de intervenciones entre la población civil, las instituciones públicas y el sector privado no da espera, pues el estancamiento de la cadena de valor del narcotráfico parecer ser un *fenómeno transitorio* ante el cual los actores criminales vinculados a las fases más rentables de esta economía ilícita podrían reaccionar en función de reactivar el tráfico de cocaína represada en Tumaco, tal y como lo hicieron en periodos anteriores durante los cuales se presentó la misma acumulación anómala de hoja de coca, pasta base y clorhidrato.

¹² Entrevista con líderes sociales/comunitarios de Tumaco.

¹³ Entrevista con uniformados de la Fuerza Pública en Tumaco.

A stylized, light blue map of Tulumaco, showing the town's layout and surrounding terrain, serves as the background for the entire page. The map features a grid of streets in the town center and irregular lines representing the surrounding landscape and water bodies.

CAPÍTULO CUATRO

RETOS PARA LAS AUTO- RIDADES PÚBLICAS EN TUMACO



4

Narcotráfico y seguridad regional

Tumaco fue priorizado como uno de los 11 municipios que integran la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEII) del Pacífico Nariñense, conocidas como “Zonas Futuro” (véase figura 4.1). Esta zona fue constituida en el año 2019, con el doble propósito de proveer seguridad pública mediante la desarticulación de los grupos armados ilegales y promover gasto público social para contrarrestar la dependencia de la población de flujos de capital provenientes de las economías ilícitas (International Crisis Group, 2019, p. 26).

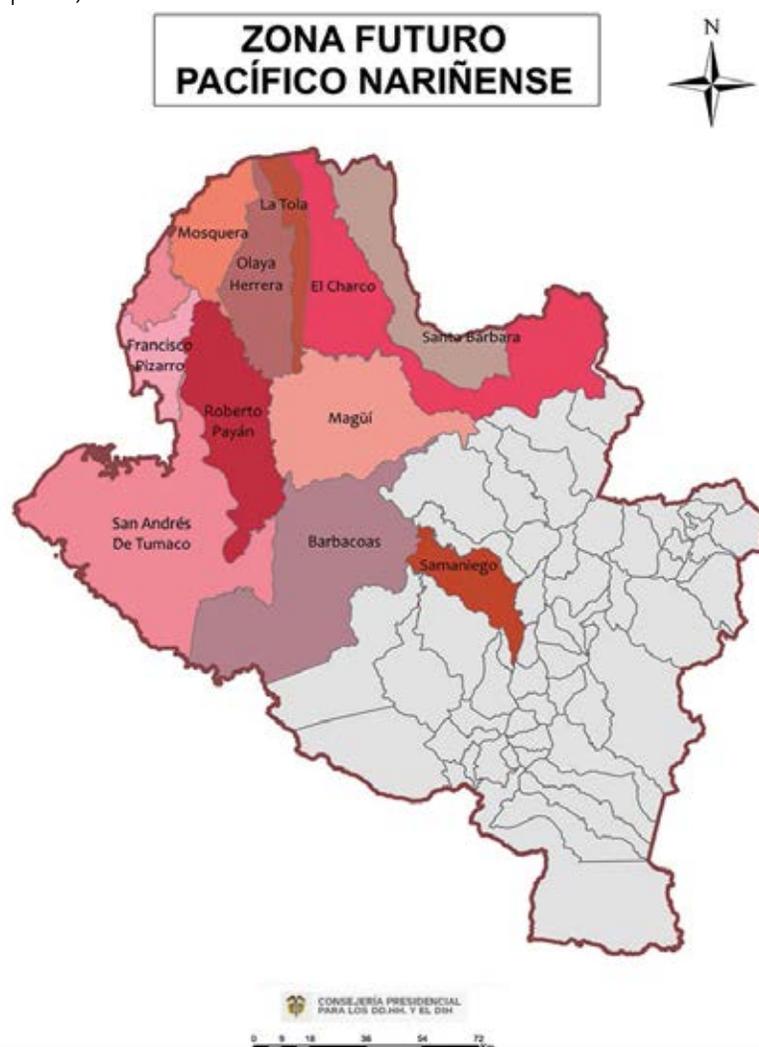


Figura 4.1. Zona Futuro del Pacífico nariñense
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (2022).

Desde entonces, la Fuerza Pública ha propinado grandes golpes, en términos de bajas de cabecillas de grupos armados ilegales, como las de los alias 'Guacho', 'David' y 'Borojó', y capturas como la del narcotraficante alias 'Contador'. Por su parte, el Gobierno nacional ha invertido cerca de COP 570 mil millones en Tumaco, en rubros como salud, educación, infraestructura, prevención de reclutamiento y fortalecimiento comunitario.

Aun así, ni la situación general de seguridad ni las condiciones materiales de subsistencia de los habitantes rurales y urbanos de Tumaco han mejorado sustancialmente (Bravo, 2022). En efecto, existen restricciones a la intervención de la Fuerza Pública que han influido sensiblemente en el sostenido número de cultivos de hoja de coca en Tumaco. En el plano nacional, sobresale la suspensión de la fumigación aérea con glifosato en el año 2015 por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, en cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Desde entonces, este Tribunal restringió severamente la aspersion, hasta casi prohibirla, con base en el principio de precaución: aduce que no existe certeza técnico-científica acerca de sus efectos nocivos (o no) a mediano y largo plazo sobre la salud y el medio ambiente. Actualmente, las fumigaciones continúan suspendidas a nivel nacional (Arroyave-Quintero y Santamaría-Benavides, 2017, p. 176).

La tensión se agudizó con ocasión de la implementación del PNIS en el año 2017, que priorizó la sustitución concertada con las comunidades y solo ante el incumplimiento de los compromisos pactados se habilitó la erradicación manual forzada. En Tumaco, 16 524 familias se inscribieron en el PNIS, comprometiéndose a sustituir 12 076 hectáreas, con un nivel de cumplimiento del 99 % y una tasa de resiembra de tan solo el 1 % (UNODC, SIMCI, 2020, pp. 33-40). Como resultado, se acentuó la fuerte represión de los grupos armados ilegales que recurren permanentemente al homicidio de líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito para sabotear el PNIS, como ocurrió en el caso ya mencionado de José Jair Cortés.

Más recientemente, en 2021, el Tribunal Superior de Pasto ordenó la suspensión total de la erradicación manual y de la aspersión terrestre de cultivos de uso ilícito en territorios colectivos habitados por comunidades afrocolombianas e indígenas en 10 municipios del Pacífico nariñense, incluyendo Tumaco. La determinación se adoptó en el marco de una acción de tutela promovida por varias colectividades étnicas y se sustentó en la vulneración de su derecho fundamental a la consulta previa por parte de las autoridades públicas encargadas de las intervenciones. Esta decisión contribuyó a que se duplicaran las hectáreas sembradas en los territorios colectivos ubicados en Nariño (56 516), concentrando el 71 % de los cultivos de uso ilícito del departamento en el 2021 (UNODC, SIMCI, 2022, p. 51).

Aun así, el despliegue de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), en su esfuerzo por contrarrestar la consolidación de Tumaco como enclave del narcotráfico, se refleja en sus resultados operativos. Entre los años 2010 y 2015, las autoridades incautaron 69 200 kg de hoja de coca. Así mismo, entre su puesta en marcha en el año 2017 y el año 2019, la campaña militar y policial ATLAS reportó haber incautado 10 959 kg de hoja de coca y 49 827 kg de clorhidrato de cocaína. Igualmente, entre 2010 y 2021, se destruyeron en promedio 16,08 laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína y se desmantelaron 353 instalaciones menores de procesamiento por año en Tumaco (Gutiérrez *et al.*, 2022, p. 43).

Sin embargo, el hecho de que Tumaco aún sea un enclave productivo ubicado en el límite suroccidental con Ecuador ha generado que el fenómeno del narcotráfico desborde unas fronteras endémicamente porosas, transformándose en una problemática de seguridad binacional, hasta el punto de que, en la última década, Ecuador se ha convertido no ya en un asiduo proveedor de precursores químicos, sino en una de las regiones con mayor tránsito de cargamentos de cocaína y otras drogas ilícitas traficadas internacionalmente (Pontón y Guayasamín, 2018, p. 303).

La situación ha llevado a reforzar la cooperación entre las autoridades colombo-ecuatorianas. La creación de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) en el año 2007 sirvió de impulso para triangular operativos entre las fuerzas militares y policiales de ambos países y organismos de inteligencia estadounidenses. Los operativos han arrojado resultados importantes, como la captura, en el año 2017, del mayor narcotraficante ecuatoriano, Washington Prado Álava —conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano—, así como el decomiso de incontables cargamentos de droga escondidos en lanchas rápidas, sumergibles, aeronaves clandestinas, entre otros artefactos (Pontón y Guayasamín, 2018, p. 321).

Actualmente, la situación de seguridad de la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, se ha deteriorado sensiblemente por el auge del narcotráfico al otro lado de la frontera. Esmeraldas se ha convertido en un enclave de exportación de cocaína por organizaciones narcotraficantes ecuatorianas que son auspiciadas por los dos grandes carteles mexicanos transnacionales: Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Durante décadas, Ecuador fungió meramente como un territorio fronterizo donde se obtenían los insumos químicos y demás precursores necesarios para el procesamiento de la pasta base de coca y la producción de clorhidrato a través del contrabando. Posteriormente, el país se transformó en un punto de tránsito de los cargamentos para exportación —y, en mucho menor medida, en un territorio con cultivos de hoja de coca— (Rivera-Rohn y Bravo-Grijalva, 2020, p. 17). Ahora, se ha convertido en un centro de distribución de cocaína. Esto responde al conocido fenómeno del “efecto globo”, según el cual alguno, varios o todos los eslabones de la cadena del narcotráfico se expande en círculos concéntricos cuando las condiciones son propicias.

La precariedad de las condiciones de vida de las poblaciones a ambos lados de la frontera, la insuficiente presencia institucional binacional, la disponibilidad de puertos de contenedores y el auge de grupos armados

ilegales que controlan múltiples cruces ilegales terrestres, fluviales y marítimos en zonas limítrofes que sirven como corredores de narcotráfico (Méndez, 2023) facilitaron el desplazamiento del problema hacia Ecuador.

Así, en estos momentos, gran parte de los cargamentos que antes eran despachados desde Tumaco al exterior han pasado a ser enviados desde los puertos de Ecuador, en especial desde los puertos de contenedores con destino final a Europa u otros continentes. Las rutas empleadas para sacar la cocaína hacia Ecuador convergen en la provincia de Esmeraldas, cubriendo trayectos marítimos desde la ensenada de Tumaco hasta la bahía de Ancón de Sardinias, o transitando recorridos fluviales y terrestres en la frontera con el mismo destino. También se utilizan rutas con destino a Brasil, atravesando la Amazonía, y hacia el nororiente del país, con destino a Venezuela y al mar Caribe (INDEPAZ, 2023b, p. 20).

Este nuevo panorama ha suscitado un incremento sin precedentes de la violencia en territorio ecuatoriano. De hecho, en el año 2022, el país registró el promedio más alto de homicidios en toda su historia, con 25,32 por cada 100 000 habitantes; la provincia de Esmeraldas tuvo una tasa de 63 homicidios por cada 100 000 habitantes. Esto es causa del actual enfrentamiento por el control del narcotráfico entre dos grandes grupos armados: Los Choneros, que cuentan con alrededor de 15 000 integrantes, y Los Lobos, que tienen cerca de 7000 miembros; los primeros subordinados al cartel de Sinaloa, y los segundos, al cartel de Jalisco Nueva Generación. La confrontación se ha extendido incluso a las cárceles, dejando 419 muertos entre 2021 y 2022. Como consecuencia, desde el 28 de diciembre de 2022 se reactivó la Comisión Binacional de la Frontera: en el año 2023, se han incautado 2600 kilos de cocaína en operaciones desplegadas conjuntamente por autoridades de Ecuador y Colombia (Méndez, 2023).

Ahora bien, no todas las problemáticas existentes en Tumaco, la costa pacífica nariñense y el territorio fronterizo se relacionan directamente con violencia, criminalidad organizada y narcotráfico. También persisten

desafíos de justicia social. En materia de igualdad de género, una encuesta efectuada por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres a 574 mujeres, en el marco del proyecto “Vida/Género/Trabajo: invisibilidad y reproducción social en Tumaco”, arrojó como resultado principal que el 54 % de las mujeres no tiene empleo remunerado, aun cuando el 32 % del total dedica 8 horas diarias de su tiempo a tareas de cuidado del hogar o de la comunidad, y el 87 % de las que sí lo tienen gana menos de un salario mínimo. Esta paradoja la confirma Josefina Segura, lideresa del Proceso de Comunidades Negras, cuando señala que

Acá en Tumaco, a las mujeres que se dedican al hogar les dicen que no trabajan, que se mantienen ahí en la casa. No ven todo el trabajo que se necesita para criar a los hijos y hacer las demás cosas. (*El País*, 2023)

Por otra parte, la penetración de las instituciones del Estado continúa siendo inestable. Mientras que la presencia de los uniformados de la Fuerza Pública es permanente en el casco urbano de Tumaco, en el sector rural es intermitente y se circunscribe a operativos de erradicación de cultivos de uso ilícito, a allanamientos y a capturas. De hecho, la presencia de las autoridades civiles y armadas en zonas periféricas de Tumaco solo se intensifica en periodos electorales —como en las elecciones locales de octubre—, para impedir que los grupos armados ilegales coopten a los candidatos, los veten u obliguen a la población a votar por el que ellos les impongan.

Ejercicio de derechos políticos

A pesar de que la motivación de los actores armados ilegales que operan en Tumaco se centra en la apropiación de las rentas del narcotráfico, también hacen uso de narrativas políticas en el ejercicio del control territorial. Las disidencias de las GUP buscaron legitimarse con el argumento de la “defensa” de la población local ante una supuesta alianza entre el Gobierno nacional y “fuerzas paramilitares”. Por su parte, la Gente del Orden alegaba la corrupción al interior del Estado como causa de su guerra en las zonas urbanas. En todas las narrativas de los grupos armados, indistintamente del tipo de organización de la que se trate, se aduce como motivación la “protección” de la población civil frente a los grupos rivales (International Crisis Group, 2019, p. 12).¹⁴

Más allá de las justificaciones discursivas, en la práctica, el control de la población en el territorio, por medio de un ejercicio de gobierno por organizaciones armadas, repercute negativamente en el ejercicio de los derechos políticos de los habitantes rurales y urbanos de Tumaco. El control territorial en diversos territorios colectivos donde se asientan consejos comunitarios y resguardos indígenas se traduce en la negación del derecho fundamental de *gobierno autónomo* reconocido a estas comunidades étnicas por la Constitución Política de 1991. El homicidio de autoridades y líderes sociales afrocolombianos e indígenas desarticula el funcionamiento independiente de sus instituciones y acentúa el poder político de las organizaciones armadas irregulares. La proliferación de los cultivos de uso ilícito trunca las posibilidades de las comunidades de tener un desarrollo económico encuadrado en la legalidad. El desplazamiento

¹⁴ En este punto es relevante destacar que el ELN, como última organización insurgente a la que el Estado colombiano le reconoce estatus político, no hace presencia actual en Tumaco, pero sí en el municipio contiguo de Barbacoas, por conducto del Frente Comuneros de Sur, comandado por el subversivo alias ‘HH’. Desde allí, esta agrupación revolucionaria tiene entre sus objetivos retomar el control de corredores de narcotráfico que desembocan en la costa pacífica y en la frontera con Ecuador, aunque aduce la “resistencia” a las empresas multinacionales que desarrollan actividades económicas legales en la zona como razón de ser de su alzamiento armado a nivel local.

forzado lleva al desarraigo cultural, la pérdida de identidad y la usurpación de su derecho de propiedad colectiva, y su confinamiento acarrea la desconexión con su entorno rural, el casco urbano y la frontera (Olaya-Requene, 2019, p. 182).

Más aún, la restricción del ejercicio de los derechos políticos de las comunidades étnicas rurales de Tumaco ha llegado hasta el punto de que, en las últimas elecciones de los representantes de algunos consejos comunitarios afrocolombianos, los grupos armados ilegales vetaron la candidatura de varios postulados. Quienes fueron finalmente elegidos debieron tener el “permiso” de los actores armados irregulares para desempeñar sus funciones. Existe, sin duda, una estrategia de subordinación de los liderazgos sociales a los intereses de los grupos armados de control territorial y de explotación de las rentas criminales, incluyendo la apropiación de los recursos públicos que son gestionados por aquellos representantes elegidos con su respaldo.¹⁵

En algunos barrios del sector urbano de Tumaco, los grupos armados han relegado a las JAC a un segundo plano, desnaturalizando su función de intermediación entre las comunidades y el Gobierno local. Así ocurre en el barrio Humberto Manzi con las disidencias del BOAC. Solo en la medida en que los grupos armados al margen de la ley se ven obligados a trasladar personal a zonas donde existen disputas con estructuras criminales rivales —reduciendo el pie de fuerza disponible para controlar a las comunidades—, las JAC recobran su relevancia en la resolución de conflictos interpersonales de sus habitantes. No obstante, como ya se señaló, los grupos armados se reservan para sí la potestad de fungir como “instancia de cierre” ante cualquier situación que se presente (Johnson, 2021, p. 7).

Por su parte, los movimientos y partidos políticos de Tumaco tienen serios problemas de corrupción. La disputa por la captura de los recursos públicos ha generado una desconexión con las necesidades, los intereses

¹⁵ Entrevista a lideresa social/comunitaria de Tumaco.

y las reivindicaciones sociopolíticas, económicas y culturales de los habitantes. En el municipio prima el escepticismo sobre el sistema político y su funcionamiento en su conjunto.¹⁶

Un ejemplo de esta crisis de representación es que la actual curul en la Cámara de Representantes asignada a los habitantes rurales de 11 municipios del Pacífico nariñense (incluyendo a Tumaco), con ocasión de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, fue ocupada por un candidato respaldado por un cuestionado cacique regional de un partido tradicional.¹⁷ Se demandó la nulidad de esta elección; sin embargo, fue recién desestimada por el Consejo de Estado.

Asimismo, existe una cultura política basada en “amiguismos”, que no es más que una intrincada red de tráfico de influencias, en la que aquellos que tienen un canal de interlocución con funcionarios locales se benefician de la asignación del presupuesto y los empleos públicos. De este modo, se aprovechan del margen de discrecionalidad que la ley otorga en la materia y se desestima la aplicación de criterios objetivos de identificación de comunidades particularmente vulnerables o de proyectos de emprendimiento social con impacto en el bienestar general, que merecerían recibir financiación pública.¹⁸

En suma, la injerencia arbitraria de los grupos armados ilegales, la corrupción y las prácticas clientelistas arraigadas en la administración municipal, así como la crisis de representación política, erosionan el goce efectivo de los derechos políticos de los habitantes de Tumaco y sus comunidades étnicas.

¹⁶ Entrevista a funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Tumaco.

¹⁷ Entrevista a lideresa social/comunitaria de Tumaco.

¹⁸ Entrevista a líder social/comunitario de Tumaco.

Situación económica y social

Antes de que Tumaco fuera incluido dentro de la ZEII del Pacífico nariñense en el año 2019, el municipio —junto con Buenaventura— había sido elevado a la categoría de Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico (Acto Legislativo 02 de 2018). Adicionalmente, Tumaco fue priorizado en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial de la subregión Pacífico y frontera nariñense. Sin embargo, ni el rótulo jurídico-administrativo ni la focalización económico-territorial han logrado incidir significativamente en el mejoramiento de las condiciones materiales de los habitantes rurales y urbanos del municipio.

Según el último censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en 2018, el índice de pobreza multidimensional en Tumaco era del 54 % (63 % en la zona rural y 46 % en la zona urbana) y el índice de necesidades básicas insatisfechas ascendía al 28 % (39 % en el sector rural y 18 % en el casco urbano). Para el año 2019, únicamente el 54,81 % de las viviendas en la cabecera municipal de Tumaco contaba con servicio de acueducto, 8,71 % con alcantarillado, 3,91 % con gas natural y 13,28 % con conectividad a internet (Gutiérrez *et al.*, 2022, p. 1).

Un aspecto particular resalta la crisis estructural para el desarrollo económico y social de la región: la falta de oferta de educación superior. Los jóvenes bachilleres en Tumaco, por escasez y baja calidad de las universidades locales, se ven obligados a trasladarse a Pasto, Popayán o Cali, e incluso a Ecuador, para emprender sus estudios de educación superior.¹⁹

Estos precarios indicadores sociales se explican por la confluencia de dos factores: por una parte, las políticas públicas que se pretenden

¹⁹ Entrevista a líder social/comunitario de Tumaco.

implementar en Tumaco son formuladas con un doble sesgo centralista: nacional (desde el Gobierno central en Bogotá) y local (desde el Gobierno local en Pasto), lo que se traduce en planes y programas descontextualizados que desconocen las especificidades geográficas, sociales, económicas y culturales de la región. A lo que se suma la desarticulación interinstitucional entre entidades adscritas a los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal), que continúa siendo excesivamente burocratizada, pese a las mejoras recientes. Además, es notorio que la presencia de la institucionalidad estatal en materia tanto de asistencia social como de seguridad se concentra en el área urbana de Tumaco, lo que deja a las comunidades étnicas que habitan los territorios rurales desprovistas de bienes y servicios básicos, incluyendo, por supuesto, la seguridad.²⁰

Por otra parte, la escasez de sectores de la economía legal consolidados y la intermitencia de empresas que proporcionen vacantes laborales estables les impide a los habitantes de Tumaco tener oportunidades de un progreso sostenido y fomenta la vinculación de la población más jóvenes en las diversas manifestaciones de la ilegalidad. Lo que es peor, el auge sostenido del negocio del narcotráfico, junto con las oleadas de exuberante liquidez que trae consigo, han producido un efecto inflacionario y una burbuja especulativa. Los aumentos exagerados del costo de vida en la zona rural y urbana de Tumaco han dificultado el acceso de los habitantes a bienes y servicios de primera necesidad, en especial para los segmentos de población con menor capacidad adquisitiva.²¹

La dependencia económica en el narcotráfico tiene otro efecto perverso: cuando el flujo de la cadena se interrumpe por las disputas violentas entre los actores armados ilegales que luchan por controlar sus distintos eslabones, se presenta un descenso abrupto en el precio de la hoja y de la pasta base de coca, lo que, a su vez, reduce sensiblemente la principal fuente de ingresos de numerosas familias.²²

20 Entrevista a funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Tumaco.

21 Entrevista a oficial de la Fuerza Pública de Tumaco.

22 Entrevista a representantes de organización no gubernamental internacional en Tumaco.

Diversas organizaciones, distintas al Estado, tienen un papel relevante en el alivio de la situación económica y social de los habitantes de Tumaco. El sector religioso ha cumplido tradicionalmente una función de construcción de tejido social, a través del acompañamiento espiritual, la promoción de la convivencia pacífica y la asistencia socioeconómica. La Iglesia católica ha desempeñado un papel protagónico en persuadir a los miembros de grupos armados ilegales para que deserten y se reincorporen a la vida civil, y a sus líderes, para que emprendan un camino colectivo de sometimiento a la justicia o entablen negociaciones de paz con el Gobierno. Así mismo, ha establecido canales de comunicación entre las comunidades y la Fuerza Pública, en un esfuerzo por distender la coexistencia entre las partes. Las congregaciones cristianas protestantes han procurado proveer a las poblaciones más vulnerables de bienes y servicios básicos, ya sea directamente —como ocurrió durante el confinamiento pandémico— o, en su defecto, socializando la oferta estatal de subsidios disponibles.²³

No obstante, como consecuencia de la creciente tendencia a un excesivo asistencialismo social, proveniente no solo de instituciones públicas y colectividades religiosas, sino también de agencias de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales, las comunidades beneficiarias han menguado progresivamente su capacidad de agencia, transformándose en sujetos pasivos, a la espera de que la solución a sus problemáticas provenga desde fuentes externas y no a partir de su propia iniciativa.

En Tumaco persisten los problemas en materia de violencia de género. Las mujeres siguen siendo víctimas de acosos, abusos e incluso *feminicidios*. Así mismo, los grupos armados ilegales amenazan a los familiares de las lideresas comunitarias como método de anulación del liderazgo social femenino. Además, cuando acuden a denunciar los atropellos soportados, frecuentemente se topan bien sea con la incredulidad de los funcionarios públicos o con la débil capacidad de respuesta institucional de las

²³ Entrevista a funcionaria de la alcaldía municipal de Tumaco.

autoridades administrativas y judiciales. En el mismo sentido, existen considerables déficits en cuanto a la reducción de las brechas de género. La falta de suficientes escenarios de participación femenina impide un verdadero empoderamiento en los entornos familiar, laboral y político, al tiempo que propicia un pobre reconocimiento y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de las mujeres.²⁴

Por último, aun cuando la convivencia entre las comunidades afrocolombianas e indígenas es, en términos generales, armoniosa, también es cierto que existen conflictos entre ambas colectividades relacionados con la propiedad de la tierra. La superficie de los resguardos indígenas es potencialmente ampliable, lo que da lugar a que la extensión de su perímetro implique la reducción correlativa de los territorios colectivos de los consejos comunitarios colindantes. A esto se suma que los grupos armados han forzado a habitantes de ambas comunidades étnicas a “vender” predios localizados en territorios de propiedad colectiva a testafierros suyos o a colonos colaboradores del grupo. La enajenación de estos predios está prohibida, lo que causa vicios jurídicamente insalvables desde el inicio mismo de la cadena de titularidad de los terrenos.²⁵

²⁴ Entrevista a lideresa social/comunitaria de Tumaco.

²⁵ Entrevista a funcionaria de la alcaldía municipal de Tumaco.

CONCLUSIONES



1. El conflicto armado interno en Tumaco ha sufrido cambios vertiginosos en los últimos años. Los grupos armados ilegales que operan en el territorio desde la desmovilización de las AUC y de las FARC-EP se caracterizan por ser estructuras atomizadas, frecuentemente enfrentadas entre sí, con treguas precarias y alianzas inestables, y un imprevisible transfuguismo de sus miembros. El control territorial y poblacional cambia frecuentemente de amos, pero produce graves violaciones a los derechos humanos sobre comunidades étnicas (afrocolombianas e indígenas).

Las problemáticas de seguridad pública difieren sustancialmente entre los entornos rural y urbano de Tumaco. En la periferia son recurrentes los asesinatos selectivos de líderes sociales y comunitarios, desplazamientos entre veredas, la migración forzada a Ecuador y los confinamientos de comunidades ribereñas. En la cabecera municipal priman los desplazamientos intraurbanos, las extorsiones y la subordinación de los habitantes de ciertos barrios al orden de las bandas locales.

-
2. Tumaco representa un caso paradigmático de enclave productivo de narcotráfico. En su territorio se desarrollan todas las fases de la cadena del tráfico de cocaína. El cultivo de la hoja y su transformación en base de coca es realizado por comunidades rurales con altos índices de necesidades básicas insatisfechas, amparadas por la suspensión de la aspersión aérea, la fumigación terrestre y la erradicación manual forzada. La producción de clorhidrato de cocaína se lleva a cabo en laboratorios móviles (cristalizaderos) cuya propiedad es difusa. La exportación se ejecuta por medio del embarque de cargamentos utilizando rutas fluviales y marítimas.

Los grupos armados ilegales se disputan el control transversal de toda la cadena de narcotráfico, incluyendo la intermediación con los emisarios de organizaciones mexicanas de crimen transnacional.

Aun cuando desde hace casi 20 años el precio de casi todos los eslabones ha ido en declive, Tumaco continúa dependiendo de los ingresos del narcotráfico para proveer a su población de acceso a los mercados, lo que dificulta al Estado legitimarse.

3. El fenómeno del narcotráfico se ha extendido también a Ecuador. Desde allí ya no solo se importan insumos químicos claves para el procesamiento de la hoja de coca, sino que, además, ahora el país vecino se ha convertido de un punto de tránsito de cargamentos. Esto, a pesar de que los esfuerzos de las autoridades públicas binacionales y la triangulación con AMERIPOL ha arrojado sensibles resultados en términos de incautaciones, capturas y desmantelamiento de redes de crimen organizado.

En todo caso, los actores armados irregulares del lado colombiano de la frontera persisten en su estrategia de imponer sus reglas paraestatales sobre las comunidades étnicas, anulando su derecho constitucional fundamental a ejercer un gobierno autónomo al interior de sus territorios colectivos.

Asimismo, la fragilidad institucional y la escasez de oportunidades educativas y laborales en el marco de la economía legal que aún hoy padece Tumaco tienta a sus habitantes más jóvenes a vincularse al negocio del narcotráfico o los obliga a emigrar a otras regiones.

4. En los últimos meses, el conflicto interno armado en Tumaco ha experimentado una nueva reconfiguración de los actores ilegales que operan en el territorio y que se resume en el enfrentamiento violento entre dos grandes bloques de *organizaciones disidentes* que aglutinan a los demás grupos: el EMC y la Segunda Marquetalia. Esta última estructura criminal ha predominado, en parte, debido a su más avanzada tecnología de guerra.

En todo caso, la confrontación armada ha exacerbado los índices de victimización de las comunidades étnicas que se encuentran en medio del fuego cruzado: mientras los asesinatos selectivos de líderes sociales y comunitarios de toda índole no se detienen, otras prácticas atentatorias del DIH, como la siembra de minas antipersonal y otros artefactos explosivos, los confinamientos y desplazamientos, y el reclutamiento forzado de menores se han incrementado sustancialmente.

En igual sentido, los excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación continúan siendo una población altamente vulnerable.

Todo esto explica por qué Tumaco está sumida en una crisis humanitaria que el Gobierno nacional intenta conjurar a partir de un escenario de negociaciones políticas simultáneas con ambos bloques disidentes, con el objetivo de alcanzar acuerdos humanitarios que reduzcan los altos niveles de violencia.

-
5. Actualmente, Tumaco experimenta una parálisis en el flujo de la cadena de valor del narcotráfico. Esto significa que existen considerables cantidades de hoja de coca, pasta base y clorhidrato de cocaína almacenadas sin que nadie las compre. Esta crisis en el negocio ilícito obedece principalmente a tres razones: la aguda disputa armada entre las organizaciones disidentes, el alza inusitada en los precios de los precursores con los cuales se transforma la materia prima y la sobreoferta del producto por el incremento del número de cultivos y su tecnificación.

Esta situación ha llevado a que las comunidades cultivadoras ya no puedan subsistir de esta actividad, lo que ha aumentado su disposición favorable a vincularse a programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. No obstante, ante los problemas de implementación del PNIS y ante la falta de proyectos productivos sostenibles, esta ya

no resulta una alternativa viable para las comunidades, que corren el riesgo de terminar ligadas a otras economías ilícitas como la minería ilegal o de reengancharse en la cadena del narcotráfico si esta se reactiva a futuro.

6. Recientemente, Tumaco ha ido perdiendo poco a poco su preeminencia como enclave productivo del narcotráfico, dando paso al posicionamiento de la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, como futuro epicentro de la cadena de valor del tráfico de cocaína en la región del Pacífico sur. Esto ha provocado un incremento sin precedentes en los índices de violencia y criminalidad de ese país, así como un relacionamiento de los actores armados ilegales y narcotraficantes ecuatorianos con los dos carteles mexicanos transnacionales. No obstante, el transvase del fenómeno del narcotráfico al otro lado de la frontera no ha implicado una disminución de los problemas de seguridad pública territorial ni en Tumaco ni en la costa pacífica nariñense. Tampoco ha dado lugar a que las instituciones públicas cumplan con su función de satisfacer las necesidades básicas de los tumaqueños.
-

Referencias

Literatura académica

- Arroyave-Quintero, M. A. y Santamaría-Benavides, W. (2017). Los cultivos ilícitos y el narcotráfico en Tumaco: un desafío para la seguridad nacional y para las Fuerzas Militares. En: L. A. Montero-Moncada (Ed.), *Narcotráfico y control territorial: una mirada desde el Ejército* (pp. 163-239). Escuela Superior de Guerra. <https://esde-glibros.edu.co/index.php/editorial/catalog/book/21>
- Duncan-Cruz, G. (2022). *Beyond "Planta o Plomo". Drugs and State reconfiguration in Colombia*. Cambridge University Press.
- Escobedo, L. y Palacios, M. (2009). *Dinámica reciente de la violencia en la costa pacífica nariñense y caucana y su incidencia sobre las comunidades afrocolombianas*. Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIIH, Vicepresidencia de la República. <https://docplayer.es/18630868-Dinamica-reciente-de-la-violencia-en-la-costa-pacifica-narinense-y-caucana-y-su-incidencia-sobre-las-comunidades-afrocolombianas.html>
- Gallo Buraye, J. y Martínez Suárez, L. (2023). *Conceptualizando el sistema de narcotráfico en el enclave productivo Frontera Tumaco: habilidades del pensamiento sistémico para la formulación de políticas públicas efectivas y sostenibles en el tiempo* [tesis de maestría]. Universidad de Los Andes. <http://hdl.handle.net/1992/64324>
- Gutiérrez, M. P., Mendoza, L., Vélez, M. A., Weintraub, M. y Norza, E. (2022). *Caracterizando espacialmente el delito urbano en Tumaco*. Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), Universidad de Los Andes. <https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/f5b872ba-6010-4c77-8492-d236e3283bd4/content#:~:text=Encontramos%20que%20en%20Tumaco%20el,en%206.2%25%20de%20las%20manzanas.>
- Johnson, K. (2019). *Building trust in Colombia's hub of coca and conflict*. International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/building-trust-colombias-hub-coca-and-conflict>
- Johnson, K. (2021). *Tumaco, Colombia. Fluid loyalties, fluctuating criminal governance*. The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/10/GIZ-PB-Tumaco.pdf>

- Millán, S. (2011). Variaciones regionales de la presencia del ELN. En D. Aponte y A. R. Vargas (Eds.), *No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN* (pp. 111-174). Odecofi-Cinep, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Colciencias. https://www.cerac.org.co/assets/pdf/LibroCERAC_NoEstamosCondenadosALaGuerra_Completo.pdf
- Olaya-Requene, A. Y. (2019). La frontera entre Colombia y Ecuador: movi- lidades de comunidades afrocolombianas en escenarios del narcotráfico. *Iberoforum*, 14(27), 175-208. <https://www.redalyc.org/journal/2110/211062829004/html/>
- Pontón, D. y Guayasamín, T. (2018). Proceso de paz y los desafíos en la coope- ración frente al problema de las drogas ilícitas Ecuador-Colombia. En: E. Pastrana- Buelvas y H. Gehring (Eds.), *La problemática del tráfico ilícito de drogas: impac- tos regionales y globales* (pp. 303-330). Fundación Konrad Adenauer, Pontificia Universidad Javeriana. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/44382>
- Rivera-Rohn, R. y Bravo-Grijalva, C. (2020). Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico. *URVIO*, (28), 8-29. <https://doi.org/10.17141/urvio.28.2020.4410>
- Rocha, C. (2014). *Dinámicas del conflicto armado en Tumaco y su impacto huma- nitario*. Fundación Ideas para la Paz. <https://ideaspaz.org/publicaciones/inves- tigungen-analisis/2014-02/no-69-dinamicas-del-conflicto-armado-en-tuma- co-y-su-impacto -humanitario>
- Rojas-Prieto, M. M. (2015). *Tumaco un enclave nuclear en el sostenimiento de la guerri- lla*. Universidad Santo Tomás. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/460>

Informes de organizaciones internacionales.

- ComitéInternacionalde laCruzRoja.(2023).*Colombia:retoshumanitarios2023.Balance anual*. <https://www.icrc.org/es/document/colombia-retos-humanitarios-2023>
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2020). *Informe N.º 23. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS*. Bogotá. [https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Febrero/INFORME_ EJECUTIVO_PNIS_No._23.pdf](https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Febrero/INFORME_EJECUTIVO_PNIS_No._23.pdf)
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2021). *World Drug Report 2021*. Viena. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). (2022). *Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2021*. UNODC-SIMCI. https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/INFORME_MONITOREO_COL_2021.pdf

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2023). *Global Report on Cocaine 2023. Local dynamics, global challenges*. Viena. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf

Informes de organizaciones no gubernamentales

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). (2023a). *Economías de los conflictos armados en Colombia. Acercamiento a la cadena de valor del narcotráfico*. Bogotá. <https://indepaz.org.co/economias-de-los-conflictos-armados-en-colombia-acercamiento-a-la-cadena-de-valor-del-narcotrafico/>

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). (2023b). *Informe. Situación de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz*. Bogotá. <https://indepaz.org.co/informe-situacion-de-seguridad-de-los-firmantes-del-acuerdo-de-paz/>

International Crisis Group. (2019). *Calming the restless pacific. Violence and crime on Colombia's coast*. Informes sobre América Latina N.º 76, Bruselas. <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/076-calming-restless-pacific-violence-and-crime-colombias-coast#:~:text=Violence%2C%20coca%20production%20and%20drug,displacement%20and%20low%2Dintensity%20warfare.>

International Crisis Group. (2023). *Protecting Colombia's most vulnerable on the road to "Total Peace"*. Latin America Report N.º 98, Bruselas. <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/98-protecting-colombias-most-vulnerable-road-total-peace>

Investigaciones periodísticas.

- Bravo, N. (2022, julio 11). Balance Duque: Tumaco no alcanzó a ser un “polo de desarrollo”, *La Silla Vacía*. <https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/balance-duque-tumaco-no-avanzo-a-ser-un-polo-de-desarrollo/>
- Bravo, N. y Rodríguez-Álvarez, S. (2023, marzo 23). “Aguantando hambre: la crisis cocalera se expande por Colombia”. *La Silla Vacía*. <https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/aguantando-hambre-la-crisis-cocalera-se-expande-por-colombia/>
- El País*. (2023, mayo 8). Más de la mitad de las mujeres en Tumaco no tiene un trabajo remunerado. *El País*. <https://www.elpais.com.co/colombia/mas-de-la-mitad-de-las-mujeres-de-tumaco-no-tienen-un-trabajo-remunerado-0858.html>
- Méndez, A. L. (2023, abril 23). Coca de Colombia y capos mexicanos y brasileños atizan el terrorismo en Ecuador. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/cocaina-la-gasolina-que-atiza-el-terrorismo-en-ecuador-761612>
- Pardo-Quintero, C. (2023a, mayo 1). La guerra de disidencias en Tumaco que se ensañó con Mariela Marínez y su familia. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/asesinato-de-mariela-marinez-la-guerra-de-las-disidencias-en-tumaco-que-ahora-amenaza-a-su-familia/>
- Pardo-Quintero, C. (2023b, mayo 5). Crisis cocalera: el rol de Tumaco cambió y ahora es centro de almacenaje de coca. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/crisis-cocalera-tumaco-paso-de-exportador-de-coca-a-centro-de-almacenaje-en-el-pacifico/>
- Rivera-Rueda, M. (2023, abril 4). Hay un problema latente con las minas antipersonal en Tumaco. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/hay-un-problema-latente-con-las-minas-antipersonal-en-tumaco/>
- Rodríguez-Álvarez, S. y Galvis, M. (2022). En Tumaco, la guerra contra las drogas de Duque termina con saldo en rojo. *La Silla Vacía*. <https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/en-tumaco-la-guerra-contra-las-drogas-de-duque-termina-con-saldo-en-rojo/>

Documentos de entidades estatales

- Colombia, Ministerio de Defensa Nacional. (2023). *Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana 2022-2026: Garantías para la vida y la paz*. Bogotá. <https://ddhhcolombia.org.co/wp-content/uploads/2023/05/GARANTIAS-PARA-LA-VIDA-Y-LA-PAZ.pdf>.



